

6

La nueva derecha argentina

La democracia sin política

Sergio Morresi



25 años
25 libros


BIBLIOTECA
NACIONAL



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

La nueva derecha argentina

Veinticinco años, veinticinco libros

El ciclo político inaugurado en Argentina a fines de 1983 se abrió bajo el auspicio de generosas promesas de justicia, renovación de la vida pública y ampliación de la ciudadanía, y conoció logros y retrocesos, fortalezas y desmayos, sobresaltos, obstáculos y reveses, en los más diversos planos, a lo largo de todos estos años. Que fueron años de fuertes transformaciones de los esquemas productivos y de la estructura social, de importantes cambios en la vida pública y privada, de desarrollo de nuevas formas de la vida colectiva, de actividad cultural y de consumo y también de expansión, hasta niveles nunca antes conocidos en nuestra historia, de la pobreza y la miseria. Hoy, veinticinco años después, nos ha parecido interesante el ejercicio de tratar de revisar estos resultados a través de la publicación de esta colección de veinticinco libros, escritos por académicos dedicados al estudio de diversos planos de la vida social argentina para un público amplio y no necesariamente experto. La misma tiene la pretensión de contribuir al conocimiento general de estos procesos y a la necesaria discusión colectiva sobre estos problemas. De este modo, dos instituciones públicas argentinas, la Biblioteca Nacional y la Universidad Nacional de General Sarmiento, a través de su Instituto del Desarrollo Humano, cumplen, nos parece, con su deber de contribuir con el fortalecimiento de los resortes cognoscitivos y conceptuales, argumentativos y polémicos, de la democracia conquistada hace un cuarto de siglo, y de la que los infortunios y los problemas de cada día nos revelan los déficits y los desafíos.

Sergio Morresi

La nueva derecha argentina

La democracia sin política



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Sergio Morresi

La nueva derecha argentina : la democracia sin política. - 1a ed. -
Los Polvorines : Univ. Nacional de General Sarmiento ; Buenos
Aires: Biblioteca Nacional, 2008.

112 p. ; 20 x 14 cm. - (Colección "25 años, 25 libros"; 6)

ISBN 978-987-630-030-8

1. Teorías Políticas. I. Título
CDD 320.5

Colección "25 años, 25 libros"

Dirección de la colección: Horacio González y Eduardo Rinesi

Coordinación general: Gabriel Vommaro

Comité editorial: Pablo Bonaldi, Osvaldo Iazzetta, María Pia López, María
Cecilia Pereira, Germán Pérez, Aída Quintar, Gustavo Seijo y Daniela Soldano

Diseño editorial y tapas: Alejandro Truant

Diagramación: José Ricciardi

Ilustración de tapa: Juan Bobillo

© Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008

Gutiérrez 1150, Los Polvorines. Tel.: (5411) 4469-7507

www.ungs.edu.ar

© Biblioteca Nacional, 2008

Agüero 2502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (5411) 4808-6000

bibliotecanacional@bn.gov.ar

ISBN 978-987-630-030-8

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión
o digital en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en
cualquier otro idioma, sin autorización expresa de los editores.

Impreso en Argentina - *Printed in Argentina*

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

*Con la mishiadura aparecieron los Ministros de Economía.
Lo que no queda muy claro es si la mishiadura trajo a los
Ministros de Economía o si los Ministros de Economía trajeron
la mishiadura.*

Tato Bores

*Todo gran movimiento se ve obligado a pasar por tres fases:
ridículo, polémica y aceptación.*

John Stuart Mill

Para Jimena

Introducción

A comienzos de 1983, cuando los partidos tradicionales se preparaban para medir fuerzas en la contienda electoral que se aproximaba, los políticos e intelectuales que habían acompañado el Proceso de Reorganización Nacional se abocaron a reformular su discurso, su imagen e incluso parte de sus posiciones básicas. Su meta era traducir a una gramática democrática lo que una parte importante de la sociedad veía como inaceptables “políticas de la dictadura”: la liberalización de los mercados, el énfasis en la gestión, la concentración del ingreso, el acercamiento a Estados Unidos y los ataques al populismo. El éxito de esta transformación no fue inmediato; sin embargo, para mediados de la década del 80, el perfil de lo que podríamos llamar una nueva derecha comenzó a estabilizarse, sumando a su poder económico un importante caudal de poder político y cultural que se revelaría determinante en los tiempos por venir.

Esta “nueva derecha” presenta diferencias con otras derechas que camparon en nuestro país. Ante todo, se trata de una fuerza que, de modo paulatino, ha ido rompiendo los lazos (cada vez más frágiles) que la unían a las tradiciones nacionalistas y más ranciamente conservadoras, lo que le permitió adoptar —y refinar— un ideario coherente y sistemático, conocido popularmente como neoliberalismo. Sin embargo, los rasgos que distinguen a esta nueva derecha (o derecha neoliberal) no deben ocultarnos que sus orígenes están en la vieja derecha, con la que compartió ideas, hombres, planes y gobiernos en más de una ocasión.

Entender el rol de la nueva derecha en la política argentina es importante. La nueva derecha fue, es y por lo que parece continuará siendo crucial (al menos en el futuro inmediato) en la delimitación de lo que las mayorías pueden o no hacer en Argentina. El poder que ha alcanzado esta fuerza es en buena medida el fruto de un triunfo cultural, ético-político, de gran envergadura. La autoridad del establishment, como se ha dado

en llamar a los sectores dominantes, no se asienta apenas en el ejercicio del poder económico (que, sin embargo, ha sido desplegado en más de una ocasión), sino sobre todo en una hegemonía ideológica. Las ideas que en el momento en que se inauguraba la democracia eran rechazadas u observadas con recelo, a comienzos del siglo XXI son tomadas con naturalidad o levantadas como banderas por buena parte de la dirigencia política y una fracción de la sociedad civil. Incluso ciertos sectores que en general son críticos de las posiciones de la nueva derecha utilizan su lenguaje y participan de sus diagnósticos.

¿Cómo se impuso este modelo? Hay una serie de razones que nos ayudan a esbozar una explicación de tipo estructural, como el surgimiento de un nuevo modelo de acumulación económica, el ascenso del capital financiero y su influencia a través de los organismos multilaterales de crédito, el surgimiento de nuevas tecnologías y los cambios en las formas de dominación. También hay que tener en cuenta factores coyunturales o locales, como la fragilidad institucional, la falta de recursos del Estado y la disposición y los intereses de los actores políticos. Sin embargo, comprender cómo el neoliberalismo se impuso en Argentina requiere tener en cuenta, junto a los aspectos estructurales y coyunturales, la formación de una hegemonía ético-política, ideológica. Así, la propuesta de este libro es intentar entender la nueva derecha argentina, reflexionar sobre sus prácticas a través de un análisis de las ideas neoliberales y la forma en que lograron ocupar el centro de la escena.

Esto no quiere decir que los aspectos sociales, económicos, institucionales, técnicos y geopolíticos deban ser dejados de lado. La lectura que se privilegia en estas páginas no pretende reemplazar otros acercamientos, sino complementarlos y ofrecer un marco que ayude a entender, por un lado, la persistencia del neoliberalismo más allá de sus fracasos prácticos y, por el otro, algunas de las particularidades que distinguen al neoliberalismo argentino de otros neoliberalismos.

Nuestra propuesta es comenzar por describir el surgimiento de las ideas neoliberales, en las primeras décadas del siglo XX y mostrar cómo las mismas fueron transformándose y creciendo en

influencia, hasta convertirse en parte sustancial del discurso del sentido común. En el segundo capítulo se da cuenta del modo en el que la ideología neoliberal ingresó a la Argentina y las distintas circunstancias estructurales y coyunturales que hicieron posible su avance. En el capítulo tercero, se hace hincapié en los derroteros de la nueva derecha durante los años 90. Finalmente, se arriesga un muy breve balance de los temas expuestos.

Reconocimientos

Este trabajo recoge, de manera sintética y (se espera) asequible, una parte de los resultados de una investigación posdoctoral financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (IDH-UNGS) entre 2006 y 2008. Quiero expresar mi agradecimiento a Vicente Palermo y Daniel Lvovich, que dirigieron mi beca posdoctoral, a Eduardo Rinesi, director del IDH, a mis compañeros de trabajo y a los estudiantes de la carrera de Estudios Políticos de la UNGS.

La teoría neoliberal

Para entender qué es el neoliberalismo y la forma en la que impactó en Argentina, conviene comenzar por clarificar qué es el liberalismo, para así poder especificar qué es lo que hay de nuevo en el *neoliberalismo*.

Siguiendo al politólogo italiano Norberto Bobbio, “como teoría económica, el liberalismo es partidario de la economía de mercado; como teoría política es simpatizante del Estado que gobierne lo menos posible”. Cuando decimos que el liberalismo es defensor de la economía de mercado, está implicada la protección de la propiedad privada, incluyendo la propiedad privada de los medios de producción, y, por lo tanto, la existencia de un mercado de trabajo. Cuando afirmamos que el liberalismo es defensor de un Estado que gobierne lo menos posible, estamos diciendo que procura un Estado de poderes limitados (Estado de derecho) y se inclina por un Estado de funciones limitadas (Estado mínimo). Adicionalmente, se podría agregar que el liberalismo es una teoría política que no se basa en la coacción, sino en el consentimiento (siquiera hipotético) de la población.

Esta caracterización amplia nos permite avanzar y distinguir tres tipos de liberalismo a los que llamaremos clásico, moderno y contemporáneo.

Tres modelos de liberalismo

El *liberalismo clásico* se da por iniciado a fines del siglo XVII con las obras de John Locke y se extiende hasta mediados del siglo XIX. Las características principales de este primer modelo pueden ser resumidas en tres puntos.

En primer lugar, los liberales clásicos creían que la sociedad debía ser vista como una entidad autosuficiente y más o menos autoorganizada a través de mecanismos libremente escogidos, como

el mercado, encargados de traducir una serie de movimientos inconexos en un resultado beneficioso para todos, tal como lo describen Bernard de Mandeville en su *Fábula de las abejas* o Adam Smith con su metáfora de la *mano invisible*.

En segundo lugar, ponían un fuerte énfasis en las libertades personales (civiles). Las libertades consideradas fundamentales variaban de un autor a otro, pero en general incluían el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de movimiento y de palabra.

Por último, el liberalismo clásico mostraba una profunda desconfianza ante el poder político ejercido de forma discrecional y, paralelamente, un profundo interés por evitar que un hombre o un grupo tuvieran la posibilidad de obtener ese tipo de dominio. Así, los teóricos y los políticos del siglo XVIII imaginaron o recrearon instituciones para limitar las capacidades del gobierno (como la elección de autoridades, la separación de poderes y los mandatos limitados).

Podemos identificar un segundo modelo de liberalismo, al que algunos estudiosos como Michael Freedman llaman “social”, “igualitario” o “ético”. Este modelo, al que nosotros preferimos denominar *liberalismo moderno*, echó sus primeras raíces en pensadores como Georg Hegel y Alexis de Tocqueville, pero recibió una forma más acabada con el surgimiento del utilitarismo de John Stuart Mill. Lo que distingue a este movimiento del anterior es, ante todo, que los liberales comienzan a tener en cuenta el inexorable ascenso de la democracia entendida como un hecho social. Se trata, entonces, de un liberalismo modificado por la presencia de un nuevo actor: las clases populares. Podemos situar este segundo momento entre comienzos del siglo XIX y la última parte del siglo XX.

A diferencia de los liberales clásicos, los modernos no confían en que las sociedades puedan autoorganizarse. El funcionamiento del mercado, por ejemplo, requiere reglas y autoridades. En este sentido, los liberales modernos consideran al Estado como una institución cuya meta principal es cohesionar a una sociedad que, librada a sí misma, se fragmentaría.

El carácter contradictorio de los intereses de las distintas clases sociales provoca el surgimiento de disputas que sólo pueden dirimirse

políticamente. Esto, a su vez, implica la adopción de un método de resolución de conflictos que tienda hacia formas institucionales democráticas que posibiliten la cohesión social necesaria para la convivencia pacífica de los diferentes actores. Sin embargo, para los liberales modernos, inclinarse por formas democráticas no significa que la sociedad tenga que someterse a la dirección de las capas mayoritarias, sino que las clases dirigentes deben escuchar, procesar y moldear las demandas de los sectores más bajos. Para lograr este cometido, es imprescindible que, desde el Estado, se intente satisfacer las necesidades básicas de las clases populares y reorientar sus intereses (por medio de la educación) de modo tal de hacerlos compatibles con el desarrollo del interés general.

El tercer modelo, el *liberalismo contemporáneo* o *neoliberalismo*, surgió en el período de entreguerras con las obras de la Escuela de Austria (a la que nos referiremos enseguida). El neoliberalismo se presenta como una opción contradictoria con el modelo liberal moderno, en el que ve una suerte de desviación del modelo clásico. Para los neoliberales, las tesis del liberalismo moderno representan una traición a los valores liberales. Más aun, para algunos neoliberales, como Murray Rothbard, muchos de los liberales modernos (como por ejemplo Thomas H. Green o John Rawls) estaban equivocados o eran socialistas encubiertos.

El rechazo que los neoliberales muestran por el liberalismo moderno se concentra en la cuestión de la igualdad socioeconómica. Para los que adhieren al neoliberalismo la desigualdad es el eje dinámico de las sociedades, porque suponen que una situación donde algunos pueden tener mucho más que otros ofrecería estímulos para que todos compitan por llegar a los sitios más elevados. En lugar de buscar reducir la desigualdad, dicen los neoliberales, habría que desestimular los impulsos igualitaristas impuestos por la izquierda y el liberalismo moderno. Por supuesto, los neoliberales continúan defendiendo la igualdad en el sentido formal; para ellos, como para los liberales clásicos, el tipo de igualdad que puede y debe ser defendida es la igualdad abstracta (la que los ciudadanos comparten en su calidad de personas jurídicas, es decir, la igualdad ante la ley).

Se podría decir que los liberales clásicos –como Locke o Montesquieu– no tenían mucho aprecio por los sistemas democráticos. Pero, más que *antidemocráticos*, eran *predemocráticos*. Los primeros liberales modernos también veían con desconfianza a la democracia, pero muy pronto notaron la necesidad de convivir con ella. Ese “matrimonio de conveniencia” se fue afianzando con el tiempo, al punto que, durante el siglo XX, se comenzó a pensar en el liberalismo y la democracia como caras de la misma moneda, como sistemas que podían persistir sólo cuando estaban juntos. Sin embargo, a partir de los años 40 algunos neoliberales comenzaron a oponerse a la idea de que la democracia tuviera un rol imprescindible en las sociedades contemporáneas. Para ellos, la democracia carece de valor sustantivo; es apenas un método para escoger dirigentes. Las sociedades libres, afirmaba un neoliberal como Ludwig von Mises, requieren orden y pluralidad, pero esos valores no se desprenden de la democracia; por lo tanto, si llega el momento de escoger entre democracia y orden, habría que dejar de lado a la democracia.

El neoliberalismo también difiere del liberalismo moderno en su percepción del rol que debería jugar el Estado. Según los neoliberales, la intervención del Estado en la economía (que había sido preconizada por socialdemócratas y liberales modernos que buscaban garantizar mínimos de equidad social y cultural) es causa de dos males. Por un lado, se afirma, cuando el Estado interviene se producen ineficiencias en la economía que no harán más que agravarse cuando se intente corregirlas con nuevas intervenciones. Por el otro, cuando el Estado interviene, la libertad de los individuos (a la que se supone basada en la libertad de mercado) corre el riesgo de verse limitada.

Sin embargo, contra lo que suele pensarse, la mayoría de los neoliberales no está en contra del Estado. El neoliberalismo no busca un Estado débil, ni siquiera un Estado extremadamente limitado. Muy por el contrario, quiere un Estado fuerte y eficaz para garantizar el orden requerido por una economía de mercado y quiere, además, que el Estado se encargue de corregir al mercado *real* para que se acerque al mercado *ideal*. En efecto, son pocos

los neoliberales que creen en la existencia del mercado de competencia perfecta. Es por ello que proponen que sea el Estado el que asegure que la sociedad se comporte tal como lo haría si el mercado fuese efectivamente lo que afirma la teoría económica.

Los neoliberalismos

El neoliberalismo no es una corriente de pensamiento unívoca, sino una visión que cobija distintos (y a veces contradictorios) postulados teóricos que, pese a todo, comparten una serie de rasgos distintivos: 1) una percepción negativa de la igualdad socio-económica, 2) una perspectiva instrumental de la democracia y 3) la idea de que las economías contemporáneas no pueden basarse más en el *laissez faire* (que había sido tomado como bandera por el liberalismo clásico y que suponía que las sociedades podían autorregularse sin ayuda de una autoridad central).

La mayoría de los críticos del neoliberalismo suele perder de vista su perfil multifacético. No obstante, recuperar su carácter plural es fundamental para entender algunas de sus más llamativas fortalezas. El neoliberalismo reconoce al menos cuatro ramas principales: la Escuela austríaca, la Escuela de Chicago, la Escuela de Virginia y el libertarismo. Vamos a observar un poco más de cerca estas diferentes corrientes.

La escuela austríaca I: los fundadores

La escuela austríaca (también llamada de Viena o anticonstruccionista) nació de la mano de un economista polaco: Carl Menger. En sus trabajos, Menger intentaba ofrecer una alternativa a las ideas sobre el valor de la escuela clásica de economía inglesa (es decir, la que conformó el marco en el que escribieron Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx). Para no entrar en detalles, aunque simplificando en exceso, se puede afirmar que mientras la economía clásica suponía que el valor de los bienes se derivaba de

características *objetivas* (como la cantidad de trabajo necesario para su elaboración), Menger pensaba que el valor era algo que los hombres imputaban a las cosas de modo *subjetivo*, a partir de la forma en que ayudan a satisfacer necesidades. Asimismo, Menger se oponía a los lineamientos de la economía alemana de fines del siglo XIX, que sostenía que el dinero era un medio de intercambio cuya circulación se debía al Estado y que la economía capitalista era una etapa histórica que podría ser superada. De acuerdo con Menger, el dinero circulaba como un resultado involuntario de las acciones de los individuos y la economía en general poseía leyes universales, independientes de las sociedades y los gobiernos.

Para llegar a sus conclusiones, Menger invirtió el método utilizado por la mayoría de los economistas de su tiempo: trocó el análisis social por uno basado en individuos y cambió el método inductivo por uno axiomático-deductivo. Los economistas del siglo XIX partían de considerar el accionar de sujetos colectivos (como la sociedad, el Estado y las clases sociales); Menger, en cambio, propuso tomar como unidad de análisis a los individuos. Se trataba de individuos ideales, a los que Menger supuso perseguidores del interés propio y la maximización de utilidades. Por otro lado, contra buena parte de la academia alemana, Menger afirmó que las ciencias sociales no debían seguir el método inductivo utilizado en las ciencias naturales, sino el método axiomático-deductivo. El método inductivo consiste en extraer conclusiones generales a través de la acumulación de casos particulares; el deductivismo propuesto por Menger recorre el camino inverso: afirmando un conjunto de axiomas (verdades no demostrables) y siguiendo las reglas de la lógica formal, se deducen leyes que son necesariamente ciertas.

Las ideas de Menger sobre el rol primordial de los individuos en la economía y los preceptos metodológicos que deberían aplicarse en las ciencias sociales fueron retomadas por Eugen von Böhm-Bawerk, un economista austrohúngaro que, a fines del siglo XIX, inició un debate con la economía marxista atacando dos de sus pilares: la teoría del valor-trabajo (y la plusvalía que de ella se derivaba) y la idea de que una economía centralmente planificada podía ser

más eficiente que una de libre mercado. Además de brindar un poderoso aparato teórico que servía para inmunizar a los intelectuales del “canto de sirena marxista”, Böhm-Bahwerk ayudó a cimentar la escuela neoclásica a través de la introducción del factor tiempo en el análisis del interés, posibilitando así una “teoría positiva” (en lugar de crítica, como la de Marx) del capital.

Böhm-Bahwerk compartió sus estudios con un amigo que terminó convirtiéndose en su cuñado: Friedrich von Wieser. Wieser creía que la economía debía ser depurada de elementos que la estaban “marxificando”. Desde su perspectiva, cuando los economistas se referían al valor natural de las cosas estaban suponiendo una sociedad transparente de personas iguales. Él negaba validez a esa hipótesis y sostenía que para abordar el problema del valor convenía centrarse en las instituciones que le daban sentido. En este punto, Wieser aceptaba que la competencia perfecta postulada por el liberalismo clásico era una quimera; por eso creía que era fundamental ligar la economía a la sociología y averiguar qué instituciones sociales servían para ayudar al desarrollo económico y cuáles eran nocivas.

Böhm-Bahwerk y Wieser enfrentaban una paradoja: la propiedad privada y la competencia son requisitos para generar riqueza a los individuos, pero también son un obstáculo para alcanzar el máximo de utilidades posible. Como respuesta, Böhm-Bahwerk propulsaba una serie de pequeñas intervenciones por parte del Estado; Wieser, en cambio, trató de encontrar una solución institucional que no estuviera a merced de los vaivenes de la política. Esta idea, como veremos, sería de fundamental importancia para otras vertientes neoliberales, como la Escuela de Virginia.

La escuela austríaca II: el nacimiento del neoliberalismo

Ludwig von Mises nació en Lememberg en 1881. Aunque en su juventud se sintió atraído por las ideas de izquierda (su tutor en la universidad fue Carl Grünberg, padre del austro-marxismo), pronto comenzó a seguir los lineamientos de la escuela austríaca. Alumno dilecto de Böhm-Bahwerk, amigo de Wieser y compañe-

ro de Joseph Schumpeter, uno de los economistas más importantes del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a dos objetivos: construir una teoría que diera cuenta de toda la actividad humana y combatir al socialismo en cualquiera de sus formas.

A comienzos del siglo XX, Europa central parecía destinada a abrazar el socialismo. No sólo las ideas y los partidos de izquierda eran fuertes, sino que también amplios sectores del centro y la derecha coincidían con partes del diagnóstico marxista e impulsaban medidas que actuaran como correctivos al capitalismo (leyes antimonopólicas, salarios mínimos, subsidios para industrias emergentes...). Mises no estaba de acuerdo con estas soluciones de compromiso, a las que veía como ineficientes y peligrosas. En varios de sus escritos de los años 20 se mostraba tajante en la necesidad de mantener el sistema capitalista libre de las interferencias socializantes. Sin embargo, el sustento teórico de sus ideas está expuesto en una obra posterior: *La acción humana*. La acción humana, según Mises, está compuesta exclusivamente por actos deliberados contruidos de forma teleológica. De aquí Mises dedujo que las acciones deben ser estudiadas de forma apriorística (independientemente de la experiencia) y que las leyes económicas (como la de oferta y demanda) son verdades inapelables. Así, para Mises, ningún tipo de experiencia nos puede llevar a descartar un teorema económico. Este tipo de razonamientos, como veremos, tuvo muchos adeptos en Argentina.

Friedrich August von Hayek nació en Viena en 1899. Cuando era estudiante, Hayek se vio atraído por el socialismo fabiano, pero luego de relacionarse con Mises se convirtió en un antiizquierdista radical. En los años 30 se instaló en Londres, donde participó del “debate del cálculo”, en el que se discutía si la planificación económica podía o no ser más eficiente que el mercado. También escribió una crítica de las posiciones de John Maynard Keynes, quien impulsaba la intervención del Estado en la economía como método para evitar las crisis cíclicas del sistema capitalista. Para Hayek, Keynes llegaba a conclusiones erróneas porque usaba análisis agregados en lugar de concentrarse en los microfundamentos. Desde su perspectiva, la intervención estatal propuesta por Keynes sólo

podía llevar a una suba de la inflación y a la adopción de una política autoritaria.

Las críticas de Hayek a Keynes no fueron bien recibidas en la academia. Sin embargo, Hayek mantuvo sus ideas. En 1944 alcanzó reconocimiento internacional al publicar un pequeño libro de divulgación, *El camino de la servidumbre*. Allí, Hayek resumía buena parte del ideario neoliberal y concluía que, de no mediar una profunda reconfiguración de las sociedades occidentales, pronto todo el mundo se encontraría esclavizado por las “ideologías colectivistas” (socialdemocracia, socialismo, comunismo, nazismo, fascismo eran, a su entender, equivalentes). Hayek se basaba en una idea simple: las sociedades deberían articularse alrededor del mercado. Para él, era obvio que el mercado es una institución eficiente; si el Estado se inmiscuye en su labor, el resultado será malo, porque se crearán señales erradas que provocarán estancamiento.

Empero, Hayek no se conformó con argumentos pragmáticos. A partir de los 50, primero en la Universidad de Chicago y luego en la de Friburgo, concentró sus esfuerzos en estudiar los fundamentos sobre los que deberían basarse las sociedades para mantenerse libres. El resultado fue publicado a lo largo de varios años y está resumido en su obra *Ley, legislación y libertad*. Hayek afirmaba que todo orden social deriva de una interacción tan compleja que no puede ser aprehendida. De allí deducía la imposibilidad (y la inconveniencia) de diseñar de forma deliberada un orden distinto a aquél al que la humanidad ha llegado a través del método de ensayo y error. Según Hayek, las generaciones actuales deberían mostrarse humildes hacia las instituciones que nuestros antepasados desarrollaron de manera “espontánea” y que han probado su utilidad a lo largo de incontables generaciones.

Siguiendo a Hayek, las instituciones del capitalismo han llegado hasta el presente porque son más eficientes, como lo muestra el caso del mercado. Saber cuánto cuesta un bien o un servicio determinado implica considerar millones de datos dinámicos que nadie puede conocer y sopesar. Sin embargo, el mercado puede darnos la información que necesitamos a un costo mínimo. Pero más allá de la cuestión de la eficiencia, el mercado debería ser

preferido porque permite la maximización de la libertad humana. Hayek entendía que un individuo era libre en tanto pudiera elegir sus fines y los medios sin ser coaccionado *intencionalmente* (pensaba que las fuerzas impersonales no tienen voluntad propia y por lo tanto no pueden coaccionar *realmente*). Así, de acuerdo con Hayek, un hombre empobrecido porque le han robado no es libre, pero uno empobrecido porque la sociedad no le ofrece oportunidades sí lo es.

Pese a todo, Hayek admitía que el mercado era un mecanismo insuficiente para garantizar el orden social, porque los agentes no se guían sólo por los datos que éste les ofrece, sino que enmarcan esos datos en una estructura de reglas que les viene dada. Así pues, una sociedad libre es igual al mercado más las reglas. Pero, ¿cuáles reglas? Hayek pensaba que deberíamos adoptar las reglas que han llegado hasta nosotros en la forma de usos, costumbres y tradiciones. Las reglas tradicionales serían justas porque, con el paso de los años, se independizaron de las situaciones que las originaron. Para Hayek, puede encontrarse un buen compendio de estas reglas en el derecho penal privado moderno, que aparece entonces como un *derecho justo* que debe contraponerse a los *derechos injustos* (como los derechos sociales) que han sido diseñados por políticos y no surgieron “espontáneamente” a través de siglos de libre interacción de los individuos. Así, Hayek suponía que las reglas del libre mercado son espontáneas y naturales, mientras que otros modelos son deliberadamente diseñados y por lo tanto antinaturales.

Hayek no se oponía a cualquier intervención estatal en la economía. Para él, el Gobierno es necesario como proveedor de algunos bienes públicos puros y como garante de la vigencia del orden legal que permite funcionar al mercado. Pero darle un rol al Estado no implica hacer extensivo ese papel. Concretamente, el Estado propuesto por Hayek es el Estado mínimo indispensable al que ya nos referimos; su rol no era crear leyes, sino mantener, clarificar y hacer cumplir las normas que la tradición nos ha legado. En conclusión, para la visión de Hayek, en la medida en que el gobierno se limite a coaccionar a los agentes que no cumplan con sus obli-

gaciones privadas, se podrá decir que estamos ante un estado nomocrático (donde impera la ley). Si, en cambio, nos encontramos con un Estado que busca imponer los valores del altruismo y la solidaridad o que acata los deseos de la mayoría, estamos ante un orden económico condenado al fracaso y un gobierno injusto. Es en este sentido que debe entenderse el apoyo que muchos neoliberales (Hayek incluido) dieron a las dictaduras sudamericanas de los años 70. Para ellos, un gobierno militar que impusiera un orden neoliberal daba como resultado una sociedad más libre que una democracia que pusiera en riesgo al mercado.

La Escuela de Chicago

Aunque sus raíces pueden rastrearse hasta fines del siglo XIX, la escuela económica de Chicago se inicia realmente en la década del 20, con los aportes de Frank H. Knigh y Jacob Viner. Al comienzo, los trabajos de Chicago daban mucha importancia a los modelos matemáticos y tendían a concentrarse en los análisis monetarios. Estos rasgos fueron abandonados en los años treinta, pero en la posguerra serían recuperados por autores como George Stigler y Milton Friedman, quienes acabarían liderando dicha escuela.

Aunque hay diferencias entre sus integrantes, todos parecen acordar en que el ejercicio de la libertad descansa, en última instancia, en las instituciones capitalistas y que las posturas socialistas o *welfaristas* (que impulsaban la intervención del Estado en la economía con el objeto de obtener una cierta nivelación social) eran lesivas no sólo de la libertad de mercado, sino también de la libertades civiles. Según la clásica formulación de Friedman, “la democracia y la libertad sólo pueden tener lugar en aquellas naciones en las que impera el capitalismo”.

El carácter aparentemente virtuoso de la sociedad de mercado se deduce a partir de lo que Friedman y Stigler han llamado la *economía positiva*, una suerte de metodología basada en el positivismo lógico. Según esta doctrina, la primera tarea de un científico es distinguir entre los asertos teóricos y los datos. Al usar a los

primeros como organizadores de los segundos se pueden estudiar regularidades, lo que a su vez nos permite inferir y establecer causalidades. Para Friedman y Stigler, podemos confiar en los hallazgos de la economía positiva porque éstos se deducen de la aplicación de la estadística y porque el método se retroalimenta al ser aplicado en forma masiva y sistemática.

Pese a las diferencias metodológicas, Friedman y Stigler llegaron a conclusiones muy similares a las de la escuela austríaca y sostuvieron que la intervención estatal en la economía es perjudicial para el desarrollo económico y para la libre expresión. A diferencia de los austríacos, los economistas de Chicago creían que había algunos tipos de intervención más nocivos que otros. Por ejemplo, para ellos, las reglamentaciones sobre el salario mínimo, la enseñanza pública y el control de los precios de los alquileres son más preocupantes que los impuestos extraordinarios para gastos concretos (como los militares). Para Milton Friedman, sin embargo, eran dos las acechanzas más peligrosas para el sistema liberal y capitalista: la emisión monetaria inflacionaria y el sistema de seguridad social.

Durante años, entre los economistas existió consenso en tomar como válida la llamada “curva de Philips”, que postulaba una relación negativa entre inflación y desempleo. Ese acuerdo comenzó a resquebrajarse en los 60, cuando hizo su debut la *estanflación* (inflación sin crecimiento). Para Friedman, la solución al nuevo problema consistía en recurrir a las viejas ideas monetaristas. Según el monetarismo, la inflación persistente es producto de incrementos desmedidos en la emisión de dinero que no se corresponden con aumentos en la actividad económica, sino que son resultado de presiones redistributivas (provenientes sobre todo de los sectores obreros organizados). La teoría de Friedman afirma que si se emite moneda para satisfacer las demandas el resultado es una inflación más alta y un nivel más bajo de actividad. Así pues, el gobierno no debería aumentar la masa monetaria para afrontar las reivindicaciones salariales o sociales de la población, sino actuar de un modo previsible, elevando la emisión de dinero de una forma sostenida, pero lenta. Las primeras experiencias

monetaristas terminaron desastrosamente: aunque en el Chile de Augusto Pinochet y en la Inglaterra de Margaret Thatcher se logró bajar la inflación, el nivel de producción disminuyó, los salarios reales descendieron y el desempleo experimentó una suba pronunciada. Sin embargo, según Friedman, el fracaso práctico no implicaba que la teoría estuviese equivocada, sino que no fue aplicada de forma suficientemente consistente.

Con respecto al segundo peligro, el de la seguridad social pública, Friedman afirmaba que el gasto social es fuente de inflación y de déficit público, porque tiende a generar emisión monetaria no respaldada. Sin embargo —decía—, más que los problemas “de caja”, lo preocupante de la seguridad social es el aspecto cultural. Según su perspectiva, la idea (a su entender populista) de una protección de la cuna a la tumba mina la base misma del sistema capitalista que se basa en incentivos diferenciales por el mérito y el esfuerzo.

La tesis principal de la Escuela de Chicago puede resumirse así: dado que el mercado produce la mejor asignación de recursos, ningún funcionario público que intervenga en la economía, por bienintencionado que sea y por mejor información que tenga, puede obtener otro resultado que una distorsión, una ineficiencia o un retraso en el desarrollo. Ahora bien, como estas desviaciones se pueden ir incorporando a la sociedad a medida que las personas se acostumbran a la intervención del Estado, esta intervención, para provocar resultados, tiene que ser cada vez más fuerte y más frecuente, con consecuencias cada vez más peligrosas. Por eso se afirma que la economía podría ser estable y dinámica de no existir las intervenciones de los gobiernos. La manera de evitar estas intervenciones nocivas es establecer reglas (sobre todo monetarias) permanentes y estables que estén por encima de las decisiones políticas. Es por eso que Friedman (junto a otros economistas de Chicago) apoyó en Estados Unidos una reforma constitucional que hiciera a la economía aun más independiente de la política.

La Escuela de Virginia

A diferencia de las Escuelas de Austria y de Chicago, la de Virginia (también conocida como teoría de la elección pública) no presenta una teoría económica, sino un modelo político-institucional de alto contenido normativo. Sus orígenes se remontan a los trabajos que Duncan Black elaboró en 1948 sobre el comportamiento de los votantes, pero su forma actual es una creación de dos profesores del Instituto Politécnico de Virginia, James Buchanan y Gordon Tullock. En 1962, Buchanan y Tullock publicaron *El cálculo del consenso*, donde presentaron, además de su teoría institucional y una serie de precisiones metodológicas, un ambicioso programa de trabajo político. El aspecto del método es, en más de un sentido, el que marca la pauta de la obra, que procura renovar los estudios sobre la política usando las herramientas de la economía. Así, basándose en la teoría de la elección racional y utilizando los procedimientos de la microeconomía, Buchanan y Tullock piensan los fenómenos políticos como el resultado de las acciones de individuos que actúan de modo estratégico, al modo del *homo economicus*.

Para la Escuela de Virginia, entonces, los individuos son agentes auto-interesados que tienen preferencias que pueden ser ordenadas de forma consistente y que actúan adecuando medios a fines. Para Buchanan y Tullock las estructuras de preferencias son individuales, inconmensurables y no predecibles. Por ello, y porque todos los seres humanos tienen el derecho de decidir en forma autónoma qué es lo que consideran valioso, es posible imaginar que todos los hombres tienen la potestad de negociar sobre las reglas que debe adoptar un orden social y la forma en que deben ser distribuidos los bienes. ¿Y dónde se llevará a cabo esta negociación? En el mercado (no el mercado-lugar, sino la institución mercado), donde, en teoría, los sujetos pueden entrar para conseguir ventajas (o salir si no las consiguen).

La idea de los acuerdos políticos en el mercado está más claramente expuesta en otro libro de Buchanan, *Los límites de la libertad*. Allí, el autor comienza su derrotero imaginando un estado de naturaleza hobbesiano, carente de toda ley. En esa situación, los

individuos se comportan de acuerdo con sus preferencias y se inclinan por un comportamiento “productivo” (trabajan para satisfacer sus necesidades) o por uno “predatorio” (se sirven del trabajo de otros por medio del robo o la coacción). En vista de los inconvenientes de esta situación, los individuos se sentirán incentivados para crear un Estado que haga que los costos de la actividad predatoria y de vivir en la anarquía sean prohibitivamente altos y que, inversamente, sean más bajos los costos de defensa para quienes sí aceptan formar parte de una comunidad.

En realidad, aclara Buchanan, los individuos que negocian su ingreso en una comunidad mediante una suerte de contrato original no crean un solo Estado, sino dos: uno “de protección” y otro “de provisión” (o productivo). El primero requiere que todos los miembros se rijan por la regla de la unanimidad y se encarga de sancionar las normas básicas de conducta (fundando, por ejemplo, la propiedad). En este sentido, el Estado de protección es una institución de primer nivel o constitucional. El segundo tiene por objeto proveer bienes públicos (cosas que todos necesitan pero que no pueden costearse individualmente). Aunque está establecido en principio por el mecanismo de unanimidad, este Estado de provisión puede regirse cotidianamente por una regla mayoritaria, ya que es una institución de segundo orden o postconstitucional. Aquí no debe cometerse el error de pensar al Estado productivo como una suerte de Estado productivista o *welfarista*. Para la Escuela de Virginia son muy pocos los bienes públicos puros (para Buchanan, por ejemplo, ni siquiera los caminos o el medio ambiente son bienes públicos puros).

A partir de este modelo, que muestra cómo podría surgir un Estado libre, Buchanan deduce conclusiones para la política práctica. A su entender, en la mayor parte de las naciones contemporáneas se verifican dos problemas. En primer lugar, una extralimitación del Estado de protección que se hace patente en la existencia de leyes positivas que demarcan deberes (y no sólo derechos) en los que nadie ha consentido obligarse. En segundo lugar, el Estado productivo actual no se limita, como debería, a proveer bienes públicos puros; de manera ilegítima se inmiscuye en la economía privada (cuyo rango

es constitucional) a través de medidas posconstitucional. La conclusión de Buchanan es que en la actualidad la misma idea de ley se encuentra en riesgo y, de ese modo, las sociedades parecen moverse del extremo de la anarquía al del totalitarismo.

Al considerar la situación de las sociedades actuales y hasta qué punto se desviaron del hipotético contrato original, Buchanan, Tullock y Brennan (entre otros autores de la Escuela de Virginia) han propuesto una serie de medidas correctivas. Algunas son puntuales (como el establecimiento de ciertas reglas de procedimiento político) y otras más amplias y de largo alcance. De estas últimas, las propuestas más destacables son la idea de diferenciar de forma clara y permanente la instancia constitucional de la postconstitucional y el conjunto de reglas que previenen la extracción ilegítima de rentas.

Con respecto a la distinción entre el momento constitucional y el postconstitucional, la Escuela de Virginia resalta que el contrato original debería ser siempre la base de cualquier otro pacto (como las leyes y reglamentaciones). Las instituciones políticas, entonces, se vuelven garantes de un orden que sólo puede modificarse a través de un nuevo acuerdo unánime (algo improbable, pues en la situación posconstitucional no hay fuertes incentivos para que todos acuerden). Así, las normas democráticas, como son entendidas comúnmente, están supeditadas de forma lógica a la regla de la unanimidad hipotéticamente alcanzada en el momento originario. De este modo, el *statu quo* adquiere un carácter metafísico y perenne.

La segunda propuesta es la relacionada con el combate a la extracción ilegítima de rentas (*rent-seeking*). Este abordaje fue formulado originalmente por Tullock y por Anne Krueger (que después llevaría sus ideas al Fondo Monetario Internacional, de donde las tomaría Argentina). Según esta concepción, la capacidad de intervención del Estado en la economía siempre puede generar rentas para alguien; por lo tanto, es lógico que los grupos de interés quieran influenciar a los gobernantes para asegurarse ganancias extraordinarias. De acuerdo con Krueger, *siempre* que un gobierno pueda facilitar a un privado una renta o una cuasi-renta, los ejecutivos presionarán para conseguirla. Las empresas

gastarán fortunas en las presiones porque las ganancias que podrían obtener por ese medio son mayores a las que conseguirían al invertir en tecnología o eficiencia.

El problema del *rent-seeking* no debe confundirse con el de la corrupción. Aun si los funcionarios se mantienen firmes contra las presiones empresarias, el dinero que podría haberse invertido en aumentar la producción se habrá desperdiciado en hacer *lobby*. ¿Cómo se sale de esta encerrona? Para Krueger la respuesta es simple: quitando al poder político la capacidad de intervenir en la economía. Aunque el Estado no puede desaparecer, es posible establecer mecanismos que sustraigan a los gobernantes (transitorios y poco hábiles) la capacidad de intervenir en la economía (que aparece como un territorio para los expertos)

El Estado, dice la teoría de la Escuela de Virginia, no debería comportarse como quieran los gobernantes; tampoco como afirme desearlo la sociedad (que siempre puede ser manipulada), sino como lo dictaría el mercado de competencia perfecta que, por definición, imposibilita los comportamientos rentísticos. Pero, ¿cómo saber lo que dictaría el mercado *ideal* si en el mundo *real* sólo existe el mercado imperfecto? Lo que debemos hacer es escuchar a los expertos. Esto es: debemos dejar que los economistas nos digan cuáles serían los resultados del mercado perfecto. Es con base en este tipo de ideas que los organismos multilaterales de crédito impulsan medidas como la independencia de los bancos centrales o el gerenciamiento externo de la economía de un país (como fue sugerido en 2001 por el economista Rudgier Dornbusch, quien propuso que un grupo de especialistas se hiciera cargo de la economía argentina).

El libertarianismo

En Estados Unidos, la palabra “liberal” se aplica a los partidarios de medidas económicas heterodoxas y de políticas públicas activas, es decir, a quienes nosotros podríamos identificar como “progresistas”. Para evitar que se los confunda con ellos, un grupo

de neoliberales (Ayn Rand, Robert Nozick, Murray Rothbard, Nathaniel Brandel) que ha hecho hincapié en los fundamentos filosóficos de sus posiciones se llama a sí mismo libertario (*libertarian*). Después de su “cuarto de hora” durante la campaña del candidato republicano Barry Goldwater a mitad de los 60, los libertarios se eclipsaron: vista la pobre performance de los partidos políticos que defendían sus ideas (*Reformation Party; Constitucional Party; Libertarian Party*) su peso político parecía insignificante. Sin embargo, a partir de los 80 las ideas libertarias comenzaron a ganar terreno. En gran medida, eso fue posible gracias a la labor de fundaciones, *lobbies* y “tanques de ideas” (*think-tanks*), provistos tanto de recursos humanos como materiales, y también a la introducción de sus cuadros políticos en puestos clave en el Estado y en los organismos internacionales (el caso más llamativo es el del ex jefe de la Reserva Federal norteamericana, Alan Greenspan).

El corazón de la doctrina libertaria es el fruto de las obras de la escritora Ayn Rand (nacida en 1905 en San Petersburgo, emigró a Estados Unidos durante la revolución bolchevique). En sus novelas (*La rebelión de Atlas, El manantial*) y ensayos (*Capitalismo: el ideal desconocido, La virtud del egoísmo*), Rand defendió una serie de ideas que, según ella, eran la quintaesencia de la vida libre: un individualismo basado en el egoísmo, un exorbitante enaltecimiento de la propiedad privada (sin cuyo imperio la libertad de conciencia es imposible), una defensa del sistema capitalista norteamericano y un rechazo total de cualquier ideología que obligue a un individuo a actuar contra sus intereses particulares.

Las reflexiones de Rand se basan en un modelo teórico endeble al que ella llamó “objetivismo”, una mixtura extraña de teleología y deontología, de racionalismo y empirismo, de intuicionismo y nominalismo, de Aristóteles y Hobbes y de Locke y Hume. No se trata de un compuesto bien logrado, sino de una yuxtaposición de ideas disímiles que no acaban de encajar unas en otras. Esto se debe, en parte –dicen sus defensores–, a que Rand no era filósofa, sino una militante. El carácter militante de Rand es indudable; a modo de anécdota, vale comentar que, durante el macartismo, tuvo el dudoso privilegio de ser testigo de cargo contra “los diez

de Hollywood” (un grupo de artistas acusado de simpatías comunistas y que, como consecuencia de una serie de audiencias, perdieron sus empleos).

Si no cabe dudar del tesón de Rand por defender al capitalismo, los fundamentos que le brindó son algo más dudosos. Según Rand, todo lo que era correcto podía deducirse simplemente de aceptar que “la realidad es real”. Lo cognoscible, afirmaba, existe en forma independiente de nuestra experiencia. ¿Cómo puede nuestra razón aprehender el mundo? A través del principio de identidad ($A=A$), del cual podrían seguirse todas las otras categorías conceptuales, como el principio de no contradicción, el del tercero excluido e *incluso* el de causalidad. Según Rand, con su método podríamos obtener conocimiento objetivo del mundo natural y del reino moral. La autora afirmaba que la validez de nuestros juicios morales se deduce de que lo que “una entidad *es* determina lo que *debe hacer*”. Y dado que el hombre es un ser vivo, debe vivir como hombre. Para ella, vivir humanamente implicaba actuar de forma virtuosa; y la virtud no era otra cosa que el egoísmo: “procurar su propia felicidad es, para el hombre, su mayor deber moral”.

Para el objetivismo randiano, el egoísmo supone el ejercicio de tres “virtudes”: la racionalidad, la productividad y el orgullo. La racionalidad implica aceptar que la razón es la única guía moral; supone, por lo tanto, un compromiso del hombre con la producción de conocimiento y un rechazo absoluto a tomar como suyo el conocimiento de otros. La productividad entraña reconocer que el hombre puede vivir gracias al trabajo productivo y que éste depende de la aplicación de la racionalidad; es por ello que en una sus novelas Rand distinguía entre los “hombre de la mente” y los “hombres de la rapiña”. Por último, el orgullo supone aceptar que el hombre requiere proveerse de valores que hagan que su vida tenga sentido, lo que implica no ceder ante los impulsos del autosacrificio que niegan la individualidad.

Para Rand, si el egoísmo es la actitud positiva, el altruismo es el camino seguro al “reino del mal”. Dado que el valor moral supremo del hombre es vivir su propia vida, todo código moral que impon-

ga deberes, que le pida que viva para cualquier otro valor distinto de él mismo (como el bien público, la ley divina o el progreso de la humanidad), es moralmente reprochable. Establecida esta dicotomía entre el egoísmo (bien) y el altruismo (mal), Rand afirma que la historia humana ha sido durante milenios una sucesión de hechos inmorales, de culturas y naciones en las que el hombre virtuoso (egoísta) fue aplastado y sacrificado en aras de la “entelequia brumosa de la sociedad”. Para Rand, entre el derecho divino de los reyes y la democracia social no hay más que una sutil diferencia de grado. Sin embargo, la humanidad ha llegado, en tiempos recientes, a reconocer la verdad objetiva, e instituido, finalmente, un sistema moral: el capitalismo norteamericano. Lo que distingue al capitalismo norteamericano de otros sistemas es que da a los hombres el derecho a ser egoístas. Para asegurar este derecho, es necesario que se prohíba el empleo de la fuerza y por ello es necesario que el sistema incorpore un gobierno, cuya *única función* sea proteger (mediante la amenaza de sanciones físicas) el derecho al egoísmo.

Uno de los seguidores de Rand, Murray Rothbard, se alejó del objetivismo porque, a su entender, el argumento sobre el Estado y su poder coercitivo monopólico era producto de un utilitarismo incongruente con los principios libertarianos. Para Rothbard, aun un Estado delimitado representa un enorme peligro para los individuos egoístas. En este sentido, argüía, los individuos estarían mucho mejor si se organizaran en “agencias privadas de protección” y no le otorgaran el monopolio a ninguna. Según este autor, el capitalismo podría sobrevivir perfectamente a la ausencia del Estado.

La idea de una agencia privada de protección como institución para salvaguardar la libertad natural de los individuos fue explorada más a fondo por Robert Nozick, quien con su libro de 1974 *Anarquía, Estado y utopía* dio credenciales académicas más serias a las ideas libertarianas. Nozick (nacido en 1938 en Nueva York) se formó en la Universidad de Columbia. Como otros neoliberales, durante su juventud militó en una agrupación socialista. Más adelante pasó a la Universidad de Princeton, donde, además de especializarse en filosofía analítica, tomó contacto con las ideas

libertarianas y decidió que, aun cuando estaba de acuerdo con los objetivos de Rand, sus principios debían ser revisados.

La teoría de Nozick se basa en la afirmación de que los hombres tienen derechos que se desprenden de su carácter valioso, es decir de su capacidad para conciliar armoniosamente la diversidad en una totalidad que no destruye sus componentes. El hombre, que es en sí mismo una unidad armoniosa, adquiere sentido al vincularse con otros en una sociedad que respeta los derechos individuales.

Para Nozick, la mejor garantía para que una sociedad respete los derechos individuales es un “Estado mínimo”, limitado a la estricta función de proteger los derechos y garantizar el cumplimiento de los contratos voluntarios. Para justificar este Estado limitado, Nozick inicia su recorrido teórico en la consideración de un estado de naturaleza “de paz y buena voluntad” como el que había propuesto John Locke. En lugar de limitarse, como el filósofo inglés, a mostrar los inconvenientes de esa anarquía original para justificar el surgimiento del gobierno, Nozick explora posibles soluciones sin crear un gobierno. Según Nozick, sería factible que, dentro del estado de naturaleza, surgieran agencias de protección privadas. Sin embargo, a diferencia de Rothbard, Nozick pensaba que, por las leyes de la competencia, una de esas agencias se convertiría en dominante; al ser la seguridad un bien con tendencia al monopolio, el surgimiento de un Estado (ultramínimo) parece inevitable. Una vez que una agencia de seguridad alcanza una situación de dominio, es lógico que desee impedir que los particulares ejerzan justicia por su propia mano. Para lograrlo, un mecanismo aceptable podría ser el de dar seguridad a todos (incluso a los que no pagan) a cambio de que nadie tome para sí el derecho de juzgar y castigar a los que no respetan los derechos... pero, entonces, ya nos encontramos ante un auténtico Estado. Se trata de un Estado mínimo, similar al “Estado gendarme” que teorizara Herbert Spencer en el siglo XIX, que ha surgido naturalmente y “sin violar los derechos de nadie”.

La argumentación de Nozick no se detiene en justificar el Estado contra el anarco-capitalismo de Rothbard, sino que avanza para afirmar que los Estados que sobrepasan al Estado mínimo (como,

por ejemplo, el Estado de bienestar) son moralmente inaceptables. Para justificar esta afirmación, Nozick recurre a la idea de que todas las transacciones y/o redistribuciones no voluntarias son necesariamente injustas. Por ejemplo, dice Nozick, nadie me puede entregar un libro y después cobrarme por él si yo no quería ese libro. Pero eso es lo que hacen los (injustos) Estados modernos: nos proveen educación y salud que nosotros no pedimos (y a veces no usamos) a cambio de impuestos que no queremos pagar. Por eso los impuestos, dice Nozick, son el equivalente moderno al trabajo forzoso.

¿Por qué, para Nozick y para buena parte del neoliberalismo, los impuestos son injustos? Porque suponen que las personas tienen un derecho absoluto y exclusivo sobre su propiedad. Ese derecho viene de la propiedad que tienen sobre su cuerpo. Para los neoliberales, los seres humanos son dueños exclusivos de su cuerpo y son los únicos que pueden decidir qué hacer con él. Si tenemos derecho a nuestro cuerpo, tenemos derecho a lo que producimos con él. Y si es así, también tenemos derecho a aquellas partes del mundo que no son de nadie y que nosotros mejoramos con nuestro esfuerzo. Así como nadie puede violar nuestro cuerpo (o nuestra mente), tampoco nadie debería violar las propiedades que producimos con él. Pero eso es, dice Nozick, lo que hace el Estado al cobrar impuestos. Para probarlo, Nozick recurre a un ejemplo que se ha hecho famoso: el de Wilt Chamberlain. Nozick nos pide que imaginemos un mundo en el que las propiedades están repartidas del modo que a nosotros nos plazca (como por ejemplo, a cada uno lo mismo). En ese mundo vive Wilt Chamberlain (un antiguo jugador de la NBA) que firma un contrato con su club mediante el cual veinticinco centavos de cada entrada vendida van directamente a sus bolsillos. Las personas tienen derecho a hacer con su dinero lo que quieran: pueden ahorrarlo, invertirlo en un negocio, ir al cine... o ver a Chamberlain. Imaginemos que cien mil personas deciden ver al equipo de Chamberlain. Entonces, Chamberlain se convierte en un individuo con 25.000 dólares más. Y eso es justo, dice Nozick, porque nadie obligó a nadie a ver básquet. Lo que sería injusto es que el Estado le quite a Chamberlain lo que la gente

decidió darle voluntariamente para redistribuirlo como les parezca a los burócratas.

El argumento de Wilt Chamberlain es más endeble de lo que parece. Porque si bien Nozick nos da la posibilidad de hacer una distribución original de propiedades a nuestro antojo, se trata —en realidad— de una distribución de derechos *absolutos* de propiedad (no de bienes), algo que se desprende de su idea de que todos los objetos del mundo pueden ser apropiados privadamente (pero que nosotros podemos no compartir, como sucede en los Estado de bienestar). En todo caso, queda claro que, para la teoría de Nozick, un Estado que vaya más allá de brindar seguridad es ilegítimo. Si hay personas que quieren que el Estado haga más pueden formar su comunidad, apartada de aquellos que no desean pagar extra. Es con esta base que puede entenderse el famoso “¿por qué no se van a molestar a Cuba?” de algunos neoliberales argentinos.

Distintos pero unidos

Además de las mencionadas más arriba, hay otras corrientes de pensamiento neoliberal (o cercanas al neoliberalismo) que han dejado sus huellas en Argentina. Sin embargo, como se verá cuando tratemos algunas de estas perspectivas en el capítulo siguiente, se trata más bien de subdivisiones dentro de la matriz tetrapartita que incluye a las Escuelas de Austria, Chicago, Virginia y el libertarismo. Se puede decir que estas cuatro vertientes neoliberales forman una matriz única en dos sentidos: su lenguaje y sus prácticas de promoción.

El lenguaje neoliberal

A pesar de que cada uno de los neoliberalismos presenta un abordaje propio (económico deductivo en el caso de la Escuela de Austria, económico inductivo en la de Chicago, político institucional en la de Virginia, moral en el libertarismo), todos

comparten un mismo lenguaje, un mismo conjunto de definiciones que se retroalimentan. Podemos verlo dando como ejemplos algunos de los conceptos clave del neoliberalismo:

- *El Mercado*. Aparece como un *modelo* en un doble sentido. Por una parte es un modelo científico-académico: implica una serie de supuestos y rasgos que se le imputan teóricamente con el que el resto de las prácticas sociales se comparan. Por otra parte, el mercado es un modelo regulador, un ejemplo al que todas las prácticas sociales deberían intentar imitar.

- *El Estado*. En general, se define como un polo opuesto al mercado. Se forma así una dicotomía Estado-Mercado en la cual el primero ocupa el lugar negativo y/o residual. Aunque el Estado tiene un rol que cumplir (los alcances del mismo varían en diferentes abordajes), ese rol no debería atentar contra la primacía del mercado.

- *Personalagentel/hombre*. Hombres y mujeres son considerados como individuos autointeresados (incluso egoístas) con una estructura de preferencias racional. En general, se pasa sin mucha argumentación de la apreciación estética (el hombre es un individuo) a una ética (el hombre debe ser considerado apenas como un individuo con una determinada estructura mental y ciertos rasgos morales).

- *La Sociedad*. Es vista desde una perspectiva negativa y positiva a la vez. La visión negativa se pone de relieve cuando se apunta a las asociaciones de individuos que no se comportan de acuerdo con el modelo de mercado; en esta perspectiva la sociedad se traduce en “colectivismo” o en fuerzas que buscan imponer sus intereses por vías ilegítimas; en ciertos casos, incluso, se niega que la sociedad exista (aunque sí existirían las culturas y las naciones). La visión positiva entra en escena cuando el concepto de sociedad es asimilado al modelo del mercado y contrapuesto al Estado.

- *Derechos*. Los individuos se suponen siempre dotados de derechos irrebasables, negativos y, en general, exhaustivos. En la mayor parte de las visiones neoliberales, se privilegia el tratamiento del derecho de propiedad, que usualmente toma el rol de base o garantía de cualquier otro derecho que sea posible enumerar. Se

supone así que, ante los derechos de propiedad, todos los otros derechos (o deberes) carecen de sentido.

- *Libertad.* Esta idea se encuentra ligada a la de derechos. La libertad neoliberal es siempre una libertad en términos negativos (esto es, libertad como ausencia de impedimentos impuestos de forma voluntaria o consciente) y se predica necesariamente de individuos y de ninguna otra entidad.

- *Igualdad.* Para el neoliberalismo la igualdad no es un valor equiparable al de libertad, sino uno que debe ocupar un lugar subordinado. Puede ser valorada en forma positiva o negativa. Positivamente, cuando se la entiende como igualdad de los individuos ante la ley. Negativamente cuando se pretende extender la igualdad a cualquier ámbito extra-jurídico.

- *Justicia.* Se la entiende únicamente como equivalente al imperio de la ley. Cualquier idea de justicia que sobrepase esta definición (como por ejemplo el concepto de justicia social) erosiona la libertad y los derechos individuales.

- *Democracia.* Este concepto no puede referirse a la sociedad, sino a un tipo de régimen político cuyo funcionamiento “imita” en cierta forma al mercado ideal. Se considera que, en general, las sociedades contemporáneas “fetichizan” la democracia; es decir que le atribuyen un valor y un potencial de los que el sistema democrático carece.

La promoción de las ideas neoliberales

Además de un mismo lenguaje, los neoliberalismos comparten espacios y formas de promocionar sus ideas. A diferencia de otros movimientos políticos que procuran apelar a un público amplio (como los sectores populares, las mayorías morales o las clases medias), los liberales privilegian otras vías en la construcción de su hegemonía: la promoción de ideas en lo que podemos llamar “el campo del conocimiento” y la implementación de políticas públicas a través de cuadros políticos que se insertan (en general por medios no electivos) en los espacios de poder gubernamental.

Para el neoliberalismo los ámbitos de producción y difusión del conocimiento siempre deben ser privilegiados. Hayek, por ejemplo, recomendaba a todos los que se le acercaban a proponerle apoyo que concentraran sus esfuerzos en la difusión de las ideas neoliberales en lugar de desviarse hacia las lides políticas. De este modo, muchos de aquellos que comulgaban con el ideario neoliberal en Estados Unidos y Europa volcaron sus aportes en fundaciones y tanques de ideas dedicados a realizar investigaciones, proponer la implementación de políticas públicas y realizar operativos de divulgación. Asimismo, se financiaron grupos de trabajo en instituciones de enseñanza tradicionales, fondos para el financiamiento de estudios de posgrado de jóvenes profesionales prometedores y para los viajes de los más eminentes profesores neoliberales, el surgimiento de casas editoriales dedicadas a publicar las obras de autores neoliberales, revistas especializadas o de interés general que reproducían artículos de las distintas escuelas de la nueva derecha y hasta programas de radio y televisión.

Hoy en día hay cientos de instituciones académicas o pseudo-académicas dedicadas a la difusión del neoliberalismo, pero la más importante continúa siendo la Sociedad Mont Pèlerin, que funciona desde 1947. Esta sociedad –en cuya fundación intervinieron el epistemólogo Karl Popper y los economistas Stigler, Hayek y Friedman– tiene desde sus orígenes el objetivo de reunir a representantes de diferentes perspectivas teóricas y políticas preocupados por rescatar “los valores centrales de la civilización”. Este “rescate” implica, según los estatutos de la sociedad, redimensionar el rol del Estado, promover un imperio de la ley que no sea enemigo del mercado y propender al establecimiento de un orden internacional de relaciones económicas pacíficas.

A modo de anécdota, vale mencionar que un hecho que enorgullece a la Sociedad Mont Pèlerin (y al neoliberalismo en general) es el importante número de ganadores del Premio Nobel, como por ejemplo, Friedrich von Hayek (1974), Milton Friedman (1976), George Stigler (1982) y James Buchanan (1986). Cabe aclarar, sin embargo, que lo que en realidad ganaron estos profesionales fue el “Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas

en memoria de Alfred Nobel”, instituido y financiado por el Banco Central sueco, que no guarda relación con la Fundación Nobel que otorga los premios mundialmente conocidos.

Además de concentrarse en el mundo “del conocimiento”, los neoliberales realizan grandes esfuerzos para llevar sus ideas a la práctica. Así, una importante cantidad de recursos se destina a financiar *lobbies*, grupos de trabajo en asociaciones profesionales y corporaciones empresariales, líderes de opinión e incluso la formación de “gabinetes en las sombras”. Estos núcleos funcionan en dos modalidades convergentes. La primera implica la preparación de equipos de trabajo, cuadros políticos y técnicos listos para ocupar posiciones de poder si son convocados por gobiernos elegidos popularmente o impuestos por las armas. La segunda modalidad está orientada, justamente, a provocar las situaciones que hacen posible (o necesario) el llamado a los cuadros neoliberales.

En Argentina, durante años, las prácticas de difusión del neoliberalismo tuvieron rasgos claramente golpistas. Sin embargo, a partir de los años 80, los grupos neoliberales optaron por una forma de operación más sutil y que se ha revelado más efectiva: la difusión ampliada por medio de “efectos rebote”: es decir, la práctica de citarse y referirse de forma cruzada para crear la sensación de que una idea, un diagnóstico, están respaldados por diversos análisis e investigaciones que en conjunto aparecen como inapelables. Sobre ello hablaremos un poco más sobre el final del próximo capítulo.

El neoliberalismo en Argentina

Pese a que son ideas comúnmente aceptadas, no parece correcto afirmar que el neoliberalismo argentino fue un modelo importado por la última dictadura militar o que fue impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Si bien las ideas neoliberales se vieron impulsadas por las medidas económicas del Proceso de Reorganización Nacional y su fuerza se potenció a partir de las operaciones de los organismos multilaterales de crédito, el neoliberalismo ha estado presente en Argentina desde antes de los 70 y tuvo varios e importantes promotores internos.

Los precursores

Durante décadas, y a pesar de los esfuerzos de los integrantes de grupos como la Sociedad Mont Pèlerin, los círculos académicos y políticos de los países centrales consideraron que el neoliberalismo era un abordaje carente de sustento teórico serio y se mostraron escépticos sobre sus propuestas. Sin embargo, en América Latina no sucedió lo mismo. En Chile, por ejemplo, la influencia de la Escuela de Chicago en el pensamiento económico fue temprana, gracias a un programa de becas y seminarios que impulsó nuevas perspectivas sobre la emisión monetaria, el fenómeno inflacionario, el rol de los sindicatos y el papel que debía jugar el Estado. En el caso particular de Argentina, las ideas neoliberales comenzaron a difundirse durante la autotitulada Revolución Libertadora.

A mediados de los años 50, las ideas neoliberales fueron incorporadas por varios de los representantes políticos e intelectuales de una élite que suele ser percibida (erróneamente) como tradicional. Esta élite se caracteriza por los apellidos de alcurnia, por su capacidad para proponer planes políticos y económicos tendientes a la reinstauración del modelo socioeconómico previo al peronismo y por participar de forma activa en gobiernos *de jure* y

de facto. Sin embargo, no se trata de un grupo que represente apenas a la ancestral oligarquía de estancieros pampeanos, sino de un conjunto de políticos e intelectuales cuyas ideas coinciden con los objetivos de una clase empresarial moderna y diversificada (con intereses en el agro, la industria y los instrumentos financieros y con profundas relaciones con las empresas de capital transnacional). Para mostrar el ingreso temprano de las ideas neoliberales en Argentina, vamos a tomar el caso de dos intelectuales de este grupo: Alberto Benegas Lynch (padre) y Álvaro Alsogaray.

Benegas Lynch, el educador

Alberto Benegas Lynch nació en 1909, en Buenos Aires, en el seno de una familia de abolengo dedicada a la vitivinicultura. Cursó estudios de economía en Buenos Aires y se dedicó durante décadas a dirigir la empresa familiar. Fue, además, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, y en 1955 la Revolución Libertadora lo nombró ministro consejero en la embajada argentina en Washington. Desde ese lugar profundizó sus relaciones (ya establecidas con anterioridad) con varios pensadores de la escuela austríaca, como Mises, y el libertarianismo, como Rand.

En 1957, a instancias de Benegas Lynch, que todavía se encontraba en Washington, se fundó en Buenos Aires el Centro de Difusión de la Economía Libre (CDEL). La idea era imitar la labor que *The Foundation for Economic Education* (FEE) llevaba a cabo en Estados Unidos. De acuerdo con Benegas Lynch, el CDEL buscaba impulsar las ideas neoliberales que ayudarían a combatir tanto la discrecionalidad de un Estado que se percibía omnívoro cuanto a un sindicalismo que era visto como “desorbitado y prototalitario”. La meta del CDEL no era intervenir directamente en política, sino ayudar a generar un cambio en la orientación económica, política y cultural del país. En este sentido, el CDEL se complementaba con la Acción Coordinadora de Iniciativas Empresarias Libres (ACIEL), una entidad inspirada por Benegas Lynch que agrupaba a firmas cuyos titulares

estaban comprometidos con el antiperonismo y se sentían cercanos a las ideas neoliberales.

Ya desde sus inicios, el CDEL se dedicó a la organización de charlas y seminarios, la publicación de libros y artículos de orientación neoliberal y el intercambio de docentes y alumnos con otros centros de estudios afines. Así, en 1957 el Centro convidó a brindar seminarios a Hayek y a otros economistas liberales como Leonard Read y Louis Baudin. En 1958 puso en circulación su revista *Ideas sobre la libertad*, cuya publicación fue saludada con calurosas cartas de Hayek, Read y Mises, entre otros. En 1959, con el apoyo del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el CDEL invitó a Mises a Buenos Aires para dictar una serie de seis conferencias. La visita, que generó algunas resistencias por parte del cuerpo de profesores, fue un éxito para el CDEL. En primer lugar, las ideas de Mises recibieron un importante lugar en los medios de prensa y fueron bien recibidas por el estudiantado. Pero, además, la concreción de la visita de Mises permitió que se estrecharan los lazos del Centro con una serie de institutos y asociaciones internacionales vinculadas a la escuela austríaca, como la FEE y la Sociedad Mont Pèlerin. Estos lazos, a su vez, permitirían que varios jóvenes pertenecientes o afines al CDEL (como Alberto Benegas Lynch hijo, Juan Carlos Cachanosky y Guillermo Polledo) obtuvieran becas de estudios en instituciones estadounidenses. Según comentó Floreal González, citado por Benegas Lynch, el objeto era preparar a estos jóvenes “para el ejercicio de la docencia en la República Argentina, y en particular para la enseñanza de la ciencia económica de acuerdo con la línea de pensamiento de la moderna escuela liberal austríaca”.

Así pues, es posible afirmar que los objetivos principales del CDEL eran la docencia y la difusión de ideas, tareas en las que iría perfeccionándose hasta llegar, en 1978, a la fundación de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), institución universitaria que entonces recibió un amplio apoyo empresario y que hoy funciona ofreciendo cursos de postgrado en Economía Política y Administración de Empresas (aunque, cabe aclararlo, ya no está directamente relacionada con los Benegas Lynch).

Alsogaray, el político

Álvaro Alsogaray nació en la provincia de Santa Fe en 1913, en una familia patricia con una larga tradición de vínculos castrenses. Ingresó a la carrera militar (en la que pidió el retiro con el grado de capitán de ingenieros) y aunque nunca realizó estudios formales de economía, participó en diversos cursos y seminarios de esa especialidad en Europa y Estados Unidos. Fue subsecretario de Minería y Ministro de Industria durante la Revolución Libertadora, ministro de Economía de Frondizi y embajador en Washington de Onganía. Alsogaray fue, además, fundador de tres partidos políticos muy similares entre sí: el Cívico Independiente en 1956, la Nueva Fuerza en 1972 y la Unión del Centro Democrático (UCEDE) en 1982.

En 1964 ó 1967 (las fechas de distintos testimonios no coinciden), mientras aún cumplía funciones de embajador en Washington, Alsogaray impulsó la creación del Instituto de la Economía Social de Mercado (IESM).

Se conoce como Economía Social de Mercado (ESM) a la doctrina creada por Walter Eucken y Alfred Müller-Armack, implementada en Alemania por Ludwig Erhard (integrante de la Sociedad Mont Pèlerin), durante el gobierno de la alianza demócrata-cristiana y liberal encabezada por Konrad Adenauer (1949-1963). Inspirada tanto en la escuela austríaca como en la economía positiva de Chicago, la ESM tuvo éxito en impulsar la reconstrucción económica germana de posguerra (conocida popularmente como “el milagro alemán”). La ESM se basa en la convicción de que la combinación entre el mercado y la propiedad privada de los medios de producción es la modalidad más eficiente de coordinación económica y la condición necesaria para garantizar la libertad política de los individuos. A diferencia de otros planteos neoliberales, la ESM supone que existe algo semejante a la ley natural (se trata, al fin y al cabo, de una doctrina social-cristiana) y reconoce que el Estado tiene un rol que cumplir (básicamente de asistencia social), pero este papel se activa única y excepcionalmente en los casos en los que no funciona ninguno de los mecanismos de mercado, como la beneficencia.

En principio, las metas del instituto creado por Alsogaray eran similares a las del CDEL. Así, el IESM publicó trabajos de sus miembros y colaboradores, tradujo varios textos de autores neoliberales, impulsó una revista (*Orientación Económica*) y organizó cursos, conferencias y seminarios que buscaban difundir el ideario de la ESM. Asimismo, el IESM se vinculó con centros internacionales orientados a la difusión del ideario neoliberal, como la Sociedad Mont Pèlerin (Alsogaray mantuvo una regular correspondencia con Hayek), el *Institute of Economic Affairs* (IEA), el ya citado FEE y (más adelante) el *Internacional Center for Economic Growth* (ICEG). Sin embargo, todo indica que, desde el comienzo, la idea de Alsogaray fue la de hacer del IESM una plataforma de lanzamiento de sus propuestas políticas y un centro de gestación de proyectos económicos para estar preparado en caso de que sus servicios fueran requeridos.

En efecto, a diferencia de Benegas Lynch, que desconfiaba de la conveniencia de inmiscuirse directamente en la lucha política, Alsogaray consideraba que los economistas debían “abandonar su torre de marfil”, y “descender a la arena política”. El objetivo de los verdaderos economistas (como él) era, según dijo en una entrevista realizada por Juan Carlos de Pablo, “desenmascarar a los políticos improvisados en pseudo-economistas, a los expertos de su ciencia infusa superior y a todos aquellos que se entrometen en los grandes problemas de la acción humana a la manera de los curanderos”. Sólo así, agregaba Alsogaray, los economistas “aumentarán su influencia sobre los asuntos del Estado, lo cual es efectivamente imprescindible”.

En todo caso, lo que resulta importante resaltar con respecto al IESM es su orientación decididamente neoliberal. Contrariamente a lo que sugieren algunos estudios, la ESM defendida por Alsogaray (que sería traducida en los años 90 como Economía Popular de Mercado) no es menos neoliberal (ni menos técnica) que la de la Escuela de Chicago o la de Austria. Con la primera comparte una suerte de obsesión por la eficiencia; con la segunda, la idea de que la base de la libertad política está en la libertad económica, que sólo puede garantizarse por el funcionamiento

del mercado, la defensa de los derechos de propiedad, la retirada del Estado de todas las áreas donde no sea imprescindible y la “libertad de trabajo” (expresión que corresponde a la idea de sindicatos sin capacidad efectiva de negociación).

La “vuelta de página”

Aunque la política del Proceso de Reorganización Nacional (PRN) no puede ser considerada como neoliberal, no es errado afirmar que los años de la dictadura brindaron una oportunidad para que las ideas neoliberales comenzaran a circular por espacios más amplios. Este ascenso del neoliberalismo se vio facilitado por la ideología liberal-conservadora del Proceso.

En la literatura especializada sobre la última dictadura suele hacerse hincapié en la incapacidad de sus protagonistas para conformar una ideología coherente que fuera asimilable por el heterogéneo conjunto de intereses amalgamados en el gobierno. Así, se suele caer en la afirmación de que el PRN era liberal en lo económico, pero conservador en lo político. Aunque este tipo de afirmaciones está justificado por la presencia de distintos grupos con ideas contrapuestas en el seno de la dictadura, es posible percibir que existió una base ideológica que sirvió de aglutinante a los distintos sectores que asaltaron el poder. Nos referimos al liberalismo conservador, sobre el que conviene detenerse un momento.

Perriaux y la ideología del Proceso

El liberalismo conservador es un conjunto de ideas de origen británico que se caracteriza por: 1) valorizar la experiencia sobre la teoría y ser contrario al racionalismo (es decir, a las abstracciones y a las idealizaciones); 2) ser moderado y prudencialista en cuanto al cambio social; 3) oponerse a las redistribuciones progresivas de los bienes y recursos, pero no a la acción estatal que busca garantizar un orden; 4) ser temeroso de la democracia (por

sus tendencias populistas y por entrañar el peligro de desembocar en una demagogia o en una tiranía de la mayoría); y 5) ser respetuoso de la sabiduría de las tradiciones e instituciones heredadas (que deben restaurarse cuando son atacadas de modo sistemático por factores exógenos). A diferencia del conservadurismo a secas, el liberalismo conservador no es contrario al mercado, al cambio social ni al individualismo, ya que –como afirma Irving Kristol– no cree que sus efectos “potencialmente disolventes” sean nocivos. Por otra parte, y distanciándose del neoliberalismo, el liberalismo conservador cree en la importancia de un orden social de tipo jerárquico y, aunque comparte la idea liberal de libertad, cree que sus límites deberían ser fijados con estrechez y precisión.

Uno de los principales exponentes del liberalismo-conservador en Argentina fue también uno de los principales impulsores del golpe de Estado de 1976: Jaime Perriau. Abogado, porteño, pupilo intelectual y representante editorial de Ortega y Gasset en Argentina y amigo personal del filósofo español Julián Marías, Perriau (1920-1981) realizó distintos cursos de filosofía y teoría del derecho en Michigan y París. Durante los años 40 fue, junto con José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los fundadores del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina (AJDA). Tras la caída del peronismo, fue funcionario en los gobiernos *de facto* de Guido, Onganía, Levingston y Lanusse.

Aunque Perriau aseguraba haber firmado varios artículos bajo seudónimo, una de las pocas obras suyas que han llegado hasta nosotros es *Las generaciones argentinas*. Allí Perriau volvía sobre la idea orteguiana de generación para su aplicación en la Argentina. La lectura de Perriau sobre las generaciones orteguianas parece demandar a Argentina una segunda alianza alrededor de una nueva generación del ochenta (de 1980) y de un nuevo proyecto nacional que venga a suplantarse a las generaciones de políticos “viejos”, populistas demagógicos (como Balbín y Perón) nacidos antes de 1917. Pero, ¿en qué consistía ese proyecto nacional y cuál era su origen?

A comienzos de los años 50, y merced a amistades forjadas cuando asistía a las reuniones de AJDA y los cursos de Cultura Católica, Jaime Perriau se integró al grupo que editaba *Demos*,

una revista de baja circulación pero de considerable influencia entre los jóvenes antiperonistas. El objetivo de ese grupo, según cuenta Carlos Turolo, era preparar planes de gobierno y estar listos para participar en política cuando se lograra derrocar a la “segunda tiranía”. Luego del golpe de Estado de 1955, pero sobre todo después del triunfo de Frondizi, Perriaux comenzó a realizar reuniones en su casa en las que se discutía de política, derecho, economía y filosofía; ésa fue la semilla del llamado “Grupo Azcuénaga”, que varios años más tarde sería un espacio de reunión para los impulsores del golpe de 1976 y uno de los semilleros de los cuadros civiles del PRN.

En 1973, apenas asumido el gobierno de Cámpora, Perriaux y su grupo comenzaron la lenta tarea de aunar voluntades y apoyos para un gobierno militar que veían como única salida al desgobierno peronista, evidenciado en la liberación de los presos políticos (Perriaux, como ministro de Justicia de Lanusse, había sido el creador de la Cámara Federal en lo penal, el célebre Camarón) y el accionar de los grupos subversivos. Ya en este momento surge la idea de que el próximo gobierno debería hacer aquello que la Revolución Argentina, inaugurada con el golpe de Onganía, no había conseguido: reorganizar el país en sus estructuras básicas. Así, por las oficinas y por la casa de Perriaux comienzan a desfilar militares, banqueros, empresarios industriales y agropecuarios, intelectuales y profesionales del derecho y la economía, entre los que se destacan José Alfredo Martínez de Hoz (el futuro ministro de Economía de Videla, que tomaría de Perriaux no sólo ideas y contactos sino también la muletilla “hay que achicar el Estado para agrandar la Nación”), Juan José Catalán (secretario de Cultura del PRN y autor de diversos documentos sobre la forma de detectar las ideas subversivas en las escuelas), Mario Cadenas Madariaga y Jorge Zorreguieta (ambos secretarios de Agricultura de Martínez de Hoz), Horacio García Belsunce (quien se denominaría a sí mismo como uno de los principales defensores de los objetivos del PRN) y Ricardo Zinn (el inspirador del plan económico que pasó a la historia como “el Rodrigazo”).

Los dos primeros personajes nombrados, Martínez de Hoz y Catalán, parecen representar dos polos ideológicos opuestos: liberal pragmático el primero y conservador reaccionario el segundo. Sin embargo, fue gracias a Perriau que ambas visiones pudieron compatibilizarse en un proyecto común (encabezado por las Fuerzas Armadas), que tenía como objetivo un disciplinamiento social capaz de restaurar el orden perdido y, al mismo tiempo, obtener una revancha histórica contra una clase obrera soliviantada y un pequeño empresariado acostumbrado a vivir de los favores de gobiernos “populistas”.

El proyecto de Perriau era, en más de un sentido, el proyecto del PRN, el plan para una nueva generación del 80. Militares furibundamente anticomunistas convencidos de estar peleando una batalla de la tercera guerra mundial, conservadores culturalmente reaccionarios (como Catalán), liberales pragmáticos (como Martínez de Hoz), liberales doctrinarios (como García Belsunce) y empresarios de convicciones ambiguas (como Zinn) podían no sólo compartir un diagnóstico (la necesidad de eliminar a la guerrilla y reordenar la economía), sino también una receta: un Estado de tipo autoritario capaz de reorganizar la sociedad argentina y fundar una “segunda república”.

Zinn y la refundación de la república

Ya iniciada la dictadura, Perriau, junto con algunos miembros de las Academias de Ciencias Morales y Políticas y de Derecho y Ciencias Sociales (como Gustavo Perramón Pearson y Horacio García Belsunce) y el apoyo de empresarios y banqueros, fundó la Sociedad de Estudios y Acción Ciudadana (SEA). La SEA fue una entidad exclusivista que reunía alrededor de mil miembros reclutados entre “hombres y mujeres idóneos” para la elaboración de planes de acción política y cultural. Uno de esos planes fue presentado al ministro del Interior de Videla, el general de división Albano Harguindeguy, en ocasión del “diálogo político” que se abrió en 1980. En más de un punto, el plan de la

SEA no hacía más que repetir los conceptos que Ricardo Zinn, uno de los concurrentes a las reuniones de Perriau, había dado a conocer en un libro publicado a pocos meses de comenzada la dictadura, *La segunda fundación de la República*.

Ricardo Mansueto Zinn (1926-1995), contador, ejecutivo de empresas (Sasetru, SocMa), banquero y consultor económico, tuvo un breve paso por la gestión pública en el segundo gobierno de Perón, pero no fue hasta la llegada de Onganía al poder que comenzó a destacarse, cuando se integró a la Comisión de Acción Industrial fundada por Krieger Vasena. Más adelante, fue funcionario de las presidencias de Levingston (secretario de Coordinación del Ministerio de Economía), de Lanusse (asesor en temas financieros) y Martínez de Perón. Fue él (aparentemente, con la ayuda de Martínez de Hoz y García Belsunce) quien diseñó las pautas para el plan económico de Celestino Rodrigo. Con la llegada del PRN, su pertenencia al grupo Perriau le facilitó la entrada al Ministerio de Economía, nuevamente en el área de asesoría. Cuando Argentina retornó a la democracia, Zinn se unió a la UCEDE, se acercó a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y a la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). También creó, junto al empresario Gilberto Montagna y con el apoyo de Franco Macri, su propio *think-tank*: la Fundación Carlos Pellegrini. Luego del triunfo de Menem, Zinn participó junto con Mariano Grondona (h) en las privatizaciones de ENTEL y SOMISA, como asesor de María Julia Alsogaray, de quien se alejó acusándola de estatista. Su última labor pública fue la de asesorar a José Estenssoro en la privatización de YPF. Murió junto con él en un oscuro accidente aéreo.

Aunque no fue protagonista del ámbito intelectual, durante el PRN Zinn fue gestor e impulsor de dos iniciativas de carácter educativo/ideológico que tendrían un impacto importante en las últimas décadas de la historia nacional: el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA, cuya creación apoyó con donaciones de su propio estudio y del Banco de Italia, cuyo directorio integraba junto a los hermanos Rohm y Franco Macri) y la Escuela de Dirección y Negocios (IAE, hoy en día parte de la

Universidad Austral), a cuyos cursos y reuniones informales de fines de los 70 Zinn asistía y otorgaba financiamiento.

El libro de Zinn es, a su modo, una síntesis perfecta de la ideología liberal conservadora. El volumen se abre con un título llamativo: “Sesenta años de decadencia”. Para el autor, la Argentina de 1976 se encuentra al final de un proceso entrópico que comenzó con la Ley Sáenz Peña y la llegada del radicalismo. Sin embargo, no es Yrigoyen sino el golpe de 1943 el que marca para Zinn (y para casi todos los ideólogos cercanos al PRN) el punto de inflexión definitivo. Fue entonces que “a la demagogia de una interminable fiesta permisiva se sumó el populismo peronista”. Y ello, dice Zinn, porque “el criterio de la cantidad reemplazó al de la calidad”, transformando a la población en una “masa abyecta” que condenó a la nación a sufrir el subdesarrollo por culpa del desarrollismo inmoral y nihilista.

Zinn se muestra crítico también de los gobiernos de facto. Para él, “el peor” fue el que encabezó Lanusse, por haber reincorporado al peronismo a la vida política. Aquí Zinn está en perfecto acuerdo con las ideas de los militares procesistas que insistían en que “esta vez” no les iba a suceder lo mismo que a sus predecesores. Otro punto en el que Zinn coincide con las declaraciones de las fuerzas armadas es la importancia del lugar geopolítico de Argentina. Zinn, como muchos de los militares (Videla, Harguindeguy, Villegas, Menéndez, Galtieri, Saint Jean) y civiles (Perriau, Etchecopar, García Belsunce, Perramón Pearson, Linares Quintana, Grondona) del PRN, está convencido de que Argentina está librando una de las batallas de la tercera guerra mundial. Según Zinn, lo que Argentina debía defender era su “integridad espiritual” y su “destino”, puestos en riesgo por la demagogia y el populismo.

Para Zinn, el destino de Argentina tiene dos nombres: cristianismo y capitalismo. El cristianismo, dice Zinn, no es apenas una religión, sino una manera de acometer la vida. Por su parte, el capitalismo no es apenas un sistema económico, sino la forma misma de la libertad en el mundo contemporáneo. El capitalismo y el individualismo, asegura Zinn, no sólo no atentan contra la sociedad, sino que son su misma condición de posibilidad. Es

por ello, continúa, que debe defenderse el carácter “sacro” de la propiedad privada y cumplir con una serie de pautas que hacen a un Estado y a una economía libre. Zinn se refiere a pautas como la seguridad social privada, la erradicación de las “prácticas extorsivas” de los sindicatos y la supresión de leyes que garantizan salarios y estabilidad laboral. Es decir, todo un resumen de las políticas que el PRN intentaría llevar a cabo y que sólo alcanzaron su plena realización durante los años 90.

Martínez de Hoz y la docencia de la dictadura

Los gobiernos dictatoriales argentinos se caracterizaron por buscar siempre el apoyo de civiles. Ese apoyo provenía de dos fuentes enfrentadas entre sí: los nacionalistas (ceranos a la iglesia, al fascismo, a las ideas comunitaristas, al corporativismo, al tradicionalismo, al conservadurismo, al franquismo e incluso a ciertos sectores del peronismo) y los liberales (proclives a un orden político plural, a una apertura económica en consonancia con los principios económicos del liberalismo, a la primacía de la Constitución de 1853 y al profesionalismo militar). Esta división es de tipos ideales, ya que los actores implicados participaron de un proceso dinámico y complejo. Sea como fuere, por distintas razones que no vamos a analizar aquí (como la Guerra Fría y el nuevo contexto internacional, el lugar del peronismo en la política argentina, la aparición de movimientos guerrilleros y las cuestiones económicas), esta división, que quizás estuvo clara hasta mediados del siglo pasado, se desdibujó a partir de los años 70. Así, el grupo Perriaux y muchos de sus amigos fueron el síntoma de una amalgama entre nacionalistas y liberales en un único modelo multifacético. Este modelo se caracterizó por ser favorable al liberalismo económico, pero también a un rol fuerte del Estado central; por sostener las formas republicanas y representativas, pero limitándolas en sus alcances; contrario a la democracia, pero abierto al pluralismo; reivindicador de las tradiciones, pero con ambiciones modernizantes; proclive a la ciudadanización, pero

dentro de un ordenamiento jerárquico; preocupado por la cultura cívica de los habitantes, pero contrario a un Estado educador; de tendencias cristianas, pero contrario al integrista católico.

Parafraseando al politólogo Hugo Quiroga, es posible afirmar que el liberalismo conservador fue el principal sustento ideológico del PRN en la búsqueda de su legitimidad de origen (la decadencia argentina producto del populismo y la demagogia), de ejercicio (la reinstauración de un orden jerárquico, pero políticamente plural y económicamente ortodoxo) y de destino (la institucionalización de un régimen de nuevo tipo, mediante una reforma constitucional o mediante una batería de leyes y reglamentaciones).

La posición liberal-conservadora fue claramente expresada por la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz. Descendiente de una familia de ricos estancieros, abogado de profesión, pero dirigente empresarial y economista por vocación, Martínez de Hoz se interesó en la política desde joven, cuando se afilió a la democracia cristiana y comenzó a reunirse con distintos grupos de intelectuales antiperonistas, como el ya mencionado ADJA. En 1955, el gobierno de Aramburu lo puso al frente de la Junta Nacional de Granos. Durante la presidencia de Frondizi, estuvo a cargo del Centro de Azucareros de Jujuy y Salta. Sobre el final del gobierno de José María Guido, en 1963, ocupó por primera vez, a propuesta del Ejército, el cargo de ministro de Economía. En ese período se alejó definitivamente de los demócratas cristianos.

La llegada de Arturo Illia al gobierno lo devolvió a la actividad privada. Por conexiones familiares ingresó a la metalúrgica ACINDAR, que llegaría a presidir más adelante. También se desempeñó como presidente de la sección argentina del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP), que agrupaba a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Unión Industrial Argentina (UIA). Este puesto fue clave porque a partir de allí Martínez de Hoz tejió una serie de relaciones personales y financieras con encumbrados banqueros norteamericanos, como David Rockefeller, que más adelante facilitaron su labor. A mediados de los 60, junto con Adalberto Krieger Vasena y Carlos Moyano Llerena, formó un nuevo grupo

de trabajo, que, como el AJDA, tenía por objeto discutir conceptos, estrechar relaciones con gente cercana a las ideas del “verdadero liberalismo” y preparar planes de trabajo para estar listos si la patria les demandaba volver a ocupar cargos públicos, algo que a Martínez de Hoz sólo le ocurriría en 1976.

A pesar de las reticencias de ciertos sectores militares, Martínez de Hoz asumió el Ministerio de Economía con el apoyo de las tres fuerzas armadas. El plan de gobierno que anunció el 2 de abril de 1976 tenía una clara orientación liberal-conservadora. Su propuesta estaba destinada a reorganizar la comunidad sobre la base de un “esfuerzo conjunto” en el que todos debían aportar lo suyo para dar vuelta una página de la historia y comenzar a andar “el camino de la libertad”. Esto implicaba que los trabajadores debían perder su enorme poder de negociación y aceptar salarios más razonables y que los empresarios debían, a cambio, comenzar a ser más eficientes para no desaparecer ante la competencia extranjera que vendría con la valuación de la moneda nacional y la apertura arancelaria.

Varios economistas, historiadores y políticos han tenido distintas interpretaciones con respecto a los objetivos reales de Martínez de Hoz y su equipo. Algunos ven en el período 1976-1981 un plan monetarista; otros, un proyecto para el encumbramiento del poder financiero que se expandía por el mundo; otros, una suerte de “retorno” al modelo agroexportador; otros, un revanchismo ciego que tenía por objeto destruir para siempre la base política del peronismo; otros, un sospechoso pragmatismo que se superponía con los intereses de las empresas amigas. No es éste el lugar adecuado para analizar el plan económico de Martínez de Hoz; digamos apenas que el mismo fue lo suficientemente errático e inconsistente como para justificar todas estas apreciaciones (y otras varias más). Sin embargo, hay un aspecto en el que Martínez de Hoz se mostró firme: su rol como educador de la sociedad.

Al asumir, Martínez de Hoz convocó a algunos viejos amigos suyos del ADJA y del grupo Perriaux. También llamó a varios hombres jóvenes, algunos con diplomas en el exterior, otros con credenciales más modestas, a quienes conocía como estudiantes

(o como estudiantes de sus amigos). Por último, abrió sus puertas a las sugerencias de algunas entidades empresariales, como la SRA. El equipo no era todopoderoso; importantes áreas y resortes de poder (como las relaciones con el mundo del trabajo, en manos del general Horacio T. Liendo) le estaban vedadas. Se trataba, además, de un conjunto bastante heterogéneo, que debía lidiar con una feroz oposición desde dentro del gobierno militar y con las críticas civiles, a las que, en lo referido a la economía, la dictadura dejó las puertas abiertas. Pero al mismo tiempo era un grupo convencido de que las tareas concretas para las que había sido convocado eran, en última instancia, secundarias con respecto a lo que debía ser el objetivo principal de su gestión: librar una “guerra cultural” (la expresión es del mismo Martínez de Hoz) que, en paralelo a la guerra sucia, impusiera en Argentina ese giro copernicano anunciado en el discurso inaugural del ministro.

La labor docente del Ministerio de Economía se desarrolló por diferentes vías: algunas “blandas”, como los discursos; otras más “duras”, como el apoyo y el impulso a la represión criminal llevada adelante por los militares, y otras más “institucionales”, como las medidas económicas que iban orientadas a encorsetar al país en un modelo económico de mercados abiertos. En esta lid, la tarea de Martínez de Hoz y su equipo pudo no haber sido un completo éxito, pero, como pronto lo comprobarían las autoridades radicales que llegaron en diciembre de 1983, estuvo lejos de ser un fracaso.

El ocaso de la política

La democracia argentina inaugurada en 1983 amaneció rodeada por factores de poder tradicionales, como los militares, las corporaciones empresarias y los sindicatos, y también por las presiones de actores que no eran precisamente nuevos, pero cuya fortaleza económica y política había alcanzado niveles desconocidos antes de la dictadura. Éste era el caso de los bancos extranjeros, que habían prestado dinero durante el PRN y ahora esperaban

recolectar los intereses de sus empréstitos en un contexto de altas tasas de interés y de retroceso de los valores internacionales de las exportaciones argentinas; y también el de los grupos empresarios nacionales y transnacionales que habían fortalecido sus posiciones resguardándose con distintos mecanismos de la anunciada (pero nunca plasmada) competencia que debería haber seguido a la etapa de “destrucción creativa” del plan de Martínez de Hoz.

El último ministro radical

Raúl Alfonsín nombró como ministro de Economía a un amigo personal con una larga trayectoria dentro de la UCR: Bernardo Grinspun. Grinspun convocó un equipo de colaboradores con los que, en su mayoría, ya había trabajado en los gobiernos de la Revolución Libertadora y de Illia. Se trataba de un típico “ministerio radical”, al punto de que el ministro no sólo era obligado a rendir cuentas al gobierno, sino también a las autoridades del partido.

Grinspun trazó un diagnóstico alarmante sobre la herencia recibida. Desde su perspectiva, la apertura económica para los bienes importados y el libre flujo de capitales hacia el exterior habían creado un escenario de inestabilidad, desindustrialización y desocupación que se agravaba con el peso de una deuda externa de dudosa legitimidad e imposible de pagar. Se diseñó entonces un plan que promovía la estabilidad mediante la dinamización de la economía. Se pretendía que, aumentando la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, creciera la demanda agregada y se recuperara el parque industrial abandonado durante el PRN. Para llevar a cabo estos objetivos, Grinspun propuso una fuerte intervención del Estado en la economía, mediante una serie de reformas al sistema financiero, un ambicioso plan de viviendas populares y un aumento del poder regulador e impositivo del gobierno.

Las críticas desde los sectores neoliberales no se hicieron esperar. Desde la flamante Unión del Centro Democrático (UCEDE), Alsogaray afirmaba que el plan era irrealizable porque el ministro

no estaba “suficientemente informado” de la nueva realidad económica del país, que sin dudas lo obligaría, con la fuerza de los hechos, a recapacitar y a tomar la senda de la austeridad mediante una drástica reducción del gasto público y el “achicamiento de un Estado agobiante”.

Pero no fueron sólo los discursos de la nueva derecha los que torcieron el rumbo delineado por el ministro Grinspun. Esto se produjo por una larga serie de factores, algunos de los cuales es necesario examinar.

Desde el comienzo de su gestión, Grinspun debió enfrentar una posición firme de la banca acreedora que impugnaba no sólo sus planes (como el fallido intento de armar un Club de Deudores que aligerara las condiciones de pago impuestas a los países latinoamericanos), sino su misma persona. Los ataques *ad hominem* de algunos representantes de los acreedores por la “falta de idoneidad” del ministro radical recibían, además, un sonoro eco tanto en la prensa argentina como dentro mismo del gobierno nacional. Los titulares de la Cancillería (Dante Caputo) y del Banco Central (Juan J. A. Concepción) y un conjunto de funcionarios de primera línea no dejaban pasar oportunidad para señalar sus diferencias con el “irascible” ministro.

También desde el comienzo, Grinspun se encontró con sectores de poder que, a pesar de tener intereses contradictorios entre sí, lograron abroquelarse en oposición a las propuestas del alfonsinismo. Paradójicamente, fue la misma política del gobierno radical la que ofreció a los representantes sindicales y del empresariado el escenario (y algunos de los incentivos necesarios) para crear ese frente común.

Una de las primeras medidas que impulsó Alfonsín fue la llamada “Ley Mucci” de reforma sindical que tenía como objeto asegurar (mediante la intervención directa del Estado) elecciones representativas en todos los gremios y una nueva regulación de las Obras Sociales sindicales. La derrota de la propuesta en el Congreso fue el fruto de la unión de varios sectores del peronismo que se habían estado enfrentando en el proceso de esclarecer las responsabilidades por la derrota electoral. Ahora, el peronismo ya

no parecía a punto de disgregarse, como se había estimado en 1983, y las cúpulas sindicales estaban mucho más sólidas que antes de la embestida radical.

La oposición peronista-sindical a Grinspun no permaneció aislada. Ello fue, en parte, gracias al llamado de Alfonsín a una concertación, un marco de reunión de los distintos sectores económicos para llegar a una solución armoniosa en las pujas distributivas. Según algunos analistas como Julieta Pesce, a Grinspun le desagradaba la idea de “pactar con las corporaciones”, y a pesar de que a la mesa de negociación asistían la UIA, la SRA, la CAC y la Confederación General del Trabajo (CGT), el ministro insistía en que ese espacio era un lugar de encuentro “de ciudadanos, no de sectores”. La falta de reconocimiento a su peso específico y su oposición (por razones políticas y/o económicas) llevó entonces a estos sectores a aunar fuerzas para presionar juntos por sus reivindicaciones. Esta singular alianza de intereses en principio divergentes llegó a su punto culminante pocos días antes de la renuncia de Grinspun, cuando un amplio abanico de entidades del agro, la industria y el comercio, junto a la CGT, firmaron el “Documento de los 20 puntos” que incluía un pedido de redimensionamiento del Estado empresario y cambios en las políticas cambiaria y arancelaria que llevaba adelante el gobierno.

La unión entre sindicatos y sectores empresarios dejó huérfano de apoyo social y económico al proyecto de Grinspun, que, en todo caso, y tal como lo había predicho el neoliberalismo, se tuvo que enfrentar a una realidad muy distinta a la imaginada.

En el plano internacional, los acreedores no fueron proclives a colaborar con los pedidos de flexibilidad del gobierno democrático. Argentina terminó cediendo a las presiones al redactar una carta de intenciones al FMI que implicaba el ajuste ortodoxo que venían reclamando los empresarios y los voceros del neoliberalismo (y que los sindicatos llegaron incluso a apoyar mediante su participación en el “Documento de los 20 puntos”).

En el plano interno, los empresarios de los grandes grupos económicos y de los conglomerados transnacionales que habían ganado posiciones predominantes durante el PRN tampoco se

mostraron dispuestos a contemporizar, sino que se mantuvieron firmes en su reclamo de participar del poder y perpetuar o profundizar el esquema económico surgido de la dictadura. Para estos actores, en este esquema, 1) el mercado interno (y los planes que se basaban en su dinamización, como el de Grinspun) no tenía un lugar importante, porque los salarios no eran ya un componente clave de la demanda agregada, sino simplemente costos que debían ser bajados para ganar competitividad en las exportaciones; 2) la inversión podía ser lucrativamente reemplazada por la fuga de capitales, mientras que 3) las medidas de control de precios y presión impositiva que pudiera llevar adelante el Estado eran fácilmente rebasables para actores con una alta integración horizontal y vertical de su poder económico.

Los sectores obreros y los pequeños y medianos empresarios —que, se suponía, deberían haber sido los principales beneficiarios de los planes de Grinspun— tampoco prestaron su apoyo. Muchos trabajadores se opusieron a las medidas del gobierno no sólo para resguardar a los gremialistas, sino, sobre todo, en defensa de sus salarios, afectados por el proceso inflacionario, que no se pudo detener (en parte, al menos, como resultado del poder ejercido por los grupos económicos dominantes). Los pequeños y medianos empresarios, por su parte, tampoco pudieron disfrutar de la prometida reactivación de sus negocios, ya que mientras los salarios reales bajaban y sus posibilidades de imponer precios eran nulas, los empresas grandes podían evadir esos problemas y mejorar aun más su posición.

Por último, la gestión de Grinspun no contó con el apoyo incondicional del gobierno radical. Alfonsín no dejó que el Ministerio de Economía cobrase autonomía plena y colocó en puestos clave a opositores a Grinspun que hicieron lo posible para conseguir su remoción, a la que veían como un paso necesario para que el gobierno pudiera comenzar el proceso de modernización y adecuación que les parecía ineludible y urgente. Además, un importante sector de la UCR, la Línea Nacional, representada por Fernando de la Rúa, mostraba públicamente su desacuerdo con Grinspun y solicitaba que el gobierno considerara un plan

económico alternativo, preparado por Domingo Cavallo y Adolfo Sturzenegger, miembros de la Fundación Mediterránea.

Carente de sustento y con una larga serie de fracasos a cuestas, Grinspun renunció en 1985. El tiempo de los políticos a cargo de la economía estaba finalizando; había llegado el momento de los “economistas profesionales” y, junto con él, la ocasión de una renovación ideológica de la derecha que daría al neoliberalismo un lugar prominente en la política argentina.

La economía marca el rumbo

En su célebre discurso del 10 de diciembre de 1983, Alfonsín había lanzado una proclama hiperpolítica, que posteriormente sería muy criticada, al afirmar que con la democracia “no sólo se vota; con la democracia se come, con la democracia se cura; con la democracia se educa”. Sin embargo, la apuesta a las soluciones políticas se fue desdibujando a medida que los distintos factores de poder fueron haciendo sentir su presión. Incluso antes de la renuncia de Grinspun estaba claro que el escenario había cambiado, como lo ejemplificaban el acuerdo con el FMI y las declaraciones del presidente Alfonsín en el sentido de que la reactivación tan esperada no podía ser apenas el resultado de un aumento del consumo, porque un país moderno y capitalista debía fomentar las exportaciones y apoyar la iniciativa privada. Estas declaraciones no eran ocurrencias ocasionales de jefe de Estado, sino que expresaban un giro en la forma de enfrentar la situación de Argentina y de entender la política. Ahora, no era la política la que guiaba a la economía, sino que eran los actores económicos más poderosos los que marcaban el rumbo que los políticos debían limitarse a aceptar.

El cambio de rumbo encarado por el presidente radical se plasmó en el recambio del elenco económico del gobierno, la búsqueda de una relación más fluida con los organismos internacionales de crédito, una mudanza en la manera de vincularse con los “ganadores” del nuevo esquema económico y, sobre todo, en un claro divorcio de la política y la economía, que a partir de entonces

comenzaron a ser vistas como esferas que debían mantenerse separadas, tal como lo ha mostrado Mariana Heredia en un excelente trabajo sobre el período.

Aunque el reemplazo de Grinspun por Juan V. Sourrouille fue promocionado como la expresión de una continuidad con el equipo anterior, resaltándose el carácter heterodoxo del nuevo funcionario, lo cierto es que Sourrouille mostró desde el principio una orientación claramente diferente a la de su antecesor. Esto lo evidenció claramente una anécdota que circuló por entonces: una de las primeras medidas que habría tomado el flamante ministro fue (aparentemente de modo literal) “tirar a la basura” la biblioteca de su predecesor en el cargo.

En su discurso inaugural, que ha sido detalladamente analizado por Matías Muraca, Sourrouille dejó en claro que la redistribución del ingreso ya no era, como en la gestión anterior, una prioridad. Ahora se hacía necesario concentrar esfuerzos en lograr la estabilidad y en emprender el crecimiento, tareas que, como diría más tarde Alfonsín desde el balcón de la Casa Rosada, requerían sacrificarse a los rigores de una “economía de guerra”. Y dado que la economía requería medidas urgentes y fulminantes, se abandonaron el gradualismo y los acuerdos que habían caracterizado a las gestiones económicas radicales y se optó por una terapia de *shock* elaborada a puertas cerradas.

El Plan Austral, ideado a comienzos de 1985, reconocía que, en lo esencial, el enfoque de la derecha neoliberal era acertado cuando afirmaba que la inflación era causada por el déficit fiscal. Pero, además, sostenía que eran necesarias otras medidas adicionales, como el congelamiento de precios y el anclaje del dólar, para evitar que la inercia de las expectativas inflacionarias carcomiera los esfuerzos de austeridad del gobierno y la sociedad. El éxito del plan dependía en gran medida del “efecto sorpresa”, y por ello se mantuvo oculto a la población hasta su lanzamiento, por vía de un decreto presidencial, sobre la mitad del año. Sin embargo, hubo actores que conocían las pautas de trabajo del equipo de Sourrouille. Eran los apoyos con los que el gobierno esperaba contar en el nuevo período: los organismos multilaterales

de crédito y los llamados “capitanes de la industria” (empresarios de los grandes grupos económicos y los conglomerados transnacionales que habían crecido en el período dictatorial al calor de contratos con el Estado, por lo que sus opositores los llamaron la “patria contratista”).

Desde 1984, distintos dirigentes de la UCR o vinculados al gobierno venían promocionando al Presidente la conveniencia de dejar a un lado el diálogo con las grandes corporaciones sectoriales y concentrarse en la formación de una alianza táctica con los sectores que se habían fortalecido durante el PRN y que se habían cobijado del reflujó de fondos de comienzos de los 80 con mecanismos de licuación de pasivos que transfirieron el grueso de sus deudas al resto de la sociedad. En este período, estos grupos se convirtieron en interlocutores privilegiados del gobierno, que intentaba negociar su colaboración en el plan de estabilización a cambio de nuevas oportunidades de negocios (como contratos para obras públicas, políticas de promoción, subsidios e información financiera).

Para cumplir con sus metas de equilibrio fiscal, el Plan Austral proponía restringir la emisión monetaria y depender, en cambio, de préstamos internacionales. El FMI tenía, entonces, un rol fundamental. Según comentaría años después un encumbrado funcionario del FMI de origen argentino, el plan de Sourrouille les pareció bueno en esencia, aunque no entendían para qué los argentinos querían agregar componentes heterodoxos como los precios máximos. En el organismo se pensaba que si Argentina dejaba de emitir moneda sin respaldo y pasaba a depender del crédito iba a tener que ajustarse sin más y emprender una cadena de reformas profundas que limitasen para siempre el gasto público.

Al beneplácito de la banca internacional y de los grandes grupos económicos, el gobierno pudo sumar el “apoyo crítico” de buena parte de la derecha neoliberal, que en esos momentos estaba comenzando a experimentar un proceso de expansión de su base popular en los grandes centros urbanos. Alsogaray, por ejemplo, afirmaba que su acuerdo con el Plan Austral se debía a que Sourrouille había hecho propias las premisas que él y su gente venían sosteniendo desde hacía más de tres décadas. Los profesio-

nales del CEMA y de la Fundación Mediterránea también ofrecieron su apoyo a un proyecto que tenía como eje un “ajuste fiscal realista” que permitiría emprender, más adelante, el camino del crecimiento económico.

A pesar de los buenos augurios iniciales y del apoyo del electorado en las elecciones de 1985, el gobierno se mostró incapaz de mantener a raya la inflación. Esto fue, en parte, el resultado del (esperable) incumplimiento de los acuerdos de aquellos sectores que tenían el poder para evadir los controles que el gobierno esperaba imponer. El gobierno optó entonces por flexibilizar sus expectativas originales y aceptó cambiar los precios “congelados” por precios “administrados”, lo que, a la postre, parecía confirmar los presagios de algunos sectores neoliberales que habían pronosticado que, si no se avanzaba rápidamente con las reformas monetarias y fiscales de fondo, la oportunidad para establecer una estabilidad sustentable estaría perdida.

El descontento social provocado por una inflación que no cejaba llevó a Sourrouille a proponer un segundo intento de *shock* a comienzos de 1987 y anunció un congelamiento de precios y salarios (aunque estos últimos fueron autorizados a “alcanzar la inflación”). Esta vez se prometió a la banca acreedora realizar reformas profundas, incluyendo un plan de privatizaciones, la desregulación de ciertos mercados y una apertura comercial orientada a disciplinar los precios internos, puntos que, según el FMI, eran indispensables si Argentina quería mostrar su buena fe y convertirse en un país al que se le podía seguir prestando.

Rápidamente, los resultados de este ajuste se revelaron desalentadores. Según los neoliberales, esto se debía a la incapacidad de la UCR (que ese año perdió las elecciones legislativas) para encarar con la firmeza necesaria las siempre reclamadas medidas de fondo. En julio de 1987, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, anunció junto con Sourrouille un ambicioso plan de reforma del Estado que incluía privatizaciones, pero no contó con el apoyo esperado. Por un lado, los grandes grupos económicos argentinos no estaban interesados en reformas de las que no eran beneficiarios directos. Por el otro, el

peronismo se abroqueló en una oposición cerrada que trabó buena parte de los planes. Asimismo, el Banco Mundial sostuvo que, de la manera en que estaban planteadas, las medidas no servían, porque se procuraba mantener un nivel de empleo inflacionario (de acuerdo con la teoría económica neoliberal, un país en desarrollo con una economía estable *debería* tener un nivel de desempleo *superior* al 7%). Por último, la derecha neoliberal pensaba que el radicalismo había entrado en tiempo de descuento y ya no tenía el poder para emprender las reformas que tanto se habían demorado. Para los neoliberales, el problema no estaba en las propuestas concretas, sino en la política. Ahora aparecía claro que no se trataba sólo de separar la economía de la política, sino de impedir que la política interrumpiera u obstaculizara la marcha de la economía. Pero el gobierno de Alfonsín, con su misma existencia, aparecía como un factor distorsivo que impedía las “soluciones necesarias”.

En abril de 1988, Argentina entró en una moratoria de pagos y la inflación volvió a elevarse. En agosto, Alfonsín lanzó su último intento de estabilización: el Plan Primavera, que, en teoría, debía alcanzar para que la UCR llegara a las elecciones de 1989 en mejores condiciones. A pesar de contar con el acuerdo de la CAC y de la UIA, el plan duró menos que su nombre. Los operadores financieros y los representantes del agro fueron los primeros en protestar por la regulación cambiaria que establecía. A comienzos de 1989 el Banco Mundial retiró su apoyo al gobierno y se disparó una corrida cambiaria que terminó por desbocar la inflación y destruir las esperanzas del gobierno.

Durante el mes de marzo de 1989, en plena campaña electoral, Sourrouille aseguraba que la economía estaba bajo control, pero una serie de subas en el valor del dólar lo desmintió con crudeza. El candidato radical a la presidencia, Eduardo Angeloz, que se presentaba rodeado de economistas neoliberales como Ricardo López Murphy y Adolfo Sturzenegger, pidió la dimisión del ministro de Economía. Alfonsín aceptó la renuncia de Sourrouille y nombró como reemplazante a Juan Carlos Pugliese, que había sido ministro de Illia y tenía una extensa carrera política en su haber. Pero el tiempo de la política se había clausurado,

como lo ilustra una célebre anécdota de ese tiempo: ante la suba del dólar paralelo, Pugliese se lamentó de la actitud del sector financiero afirmando: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.

Una sociedad neoliberal

Paralelamente a los cambios estructurales en el país aceptados o impulsados por el gobierno radical, los neoliberales argentinos completaron su propia metamorfosis. El liberalismo conservador, que había sido la ideología aglutinante durante el PRN, carecía de sentido en los nuevos tiempos de la democracia; el ordenamiento jerárquico de la sociedad que se había tratado de implementar durante la dictadura era ahora innecesario e incluso contraproducente para mostrarse a una sociedad que reclamaba cada vez más democracia. Los liberal-conservadores terminaron entonces por convertirse en neoliberales; en su discurso, la idea de un orden y de una identidad “occidental y cristiana” perdieron espacio, mientras que el concepto de libertad, antes claramente restrictivo, se fue haciendo más vago y difuso. Mientras tanto, los políticos e intelectuales que habían sido neoliberales desde hacía décadas comenzaron a tomar la jefatura de un movimiento que, al comienzo de la década del 80, parecía tener un futuro aciago. Sin embargo, al cabo de apenas dos años, se hizo claro que ese sector tenía un amplio potencial de crecimiento y que un viraje ético-político de envergadura era posible.

Por detrás de las ideas

En el primer capítulo se mencionó que para difundir y ayudar a implementar sus ideas los neoliberales recurren a fundaciones, tanques de ideas y otras instituciones no gubernamentales caracterizadas (al menos en teoría) por su independencia y por no tener ánimos de lucro. En esos establecimientos se realizan investiga-

ciones, se debaten ideas, se produce información, se forman cuadros políticos y técnicos, se tejen lazos de relación profesional y financiamiento con otros organismos, se planean iniciativas políticas y se lleva adelante toda una gama de actividades cuyo objetivo es “marcar la agenda” de los gobiernos y la sociedad.

En Argentina, la acción a través de fundaciones se vio alentada porque algunas políticas de los gobiernos democráticos y la ferocidad de los golpes de Estado hicieron de las universidades, la prensa y ciertos espacios públicos lugares poco propicios para la investigación y el debate político-ideológico. Además, en el caso de la derecha, había otros incentivos para privilegiar los canales alternativos, como por ejemplo el rechazo de amplios sectores académicos por las ideas y los métodos de las corrientes neoliberales y la facilidad que ofrece una institución privada para manejar discrecionalmente los fondos captados.

Como vimos más arriba, ya en los años 50 la derecha neoliberal y liberal-conservadora creaba espacios de encuentro y difusión, como el AJDA y el CDEL. Sin embargo, fueron iniciativas que tuvieron una vida corta o intermitente. Ya en los años 60 y 70, gracias al apoyo internacional y de algunas empresas nacionales y transnacionales, se establecieron nuevas instituciones con una base organizacional más sólida y proyectos mejor delineados. Vamos a referirnos brevemente a apenas tres de ellas.

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) fue creada en 1964 con el apoyo del Mercado de Valores de Buenos Aires, la CAC, la SRA, la UIA y un importante financiamiento de la Fundación Ford. Desde el comienzo incluyó a jóvenes economistas con fuerte inclinación técnica y contactos sólidos con la academia norteamericana. Sus sponsors argentinos, preocupados por la autonomía que estaban logrando estos profesionales, decidieron nombrar como codirector a Juan Alemann (que tenía una trayectoria menos académica pero poseía estrechos vínculos con las clases dirigentes) para que oficiase como “comisario político” y orientase la producción de FIEL. Sin embargo, con el correr del tiempo FIEL consiguió que varias firmas auspiciaran su trabajo y comenzó a vender sus investigaciones y sus informes

de coyuntura a empresas y cámaras sectoriales; de este modo logró una independencia aun mayor de sus creadores originales. Esta autonomía se plasmó con claridad en la época del PRN, cuando varios de sus economistas pasaron a formar parte de un gobierno que impulsaba algunas medidas que atentaban contra los intereses concretos de las empresas que apoyaban a FIEL.

Aunque al comienzo tenía un perfil técnico-académico, en los años 80 FIEL se reorientó hacia un proyecto técnico-político, con el propósito de intervenir en las políticas públicas, acercar proyectos a los tomadores de decisiones e influir en la opinión pública. En este último aspecto, FIEL se destacó por sobre otras instituciones neoliberales, ya que varios de sus miembros y ex miembros (como Daniel Artana, José María Dagnino Pastore y Juan Carlos de Pablo) realizaron auténticas campañas de prensa a través de los medios de comunicación, ayudando a instalar un nuevo “sentido común” en varios sectores de la sociedad. En estas campañas, los profesionales de FIEL utilizaron como instrumentos de promoción sus títulos en universidades prestigiosas y no se privaron de usar como base probatoria de sus proyectos las investigaciones realizadas por la misma institución o por consultoras económicas de ex miembros y colegas afines. Así, por ejemplo, a fines de los 90, para sustentar la concentración del apoyo gubernamental en las grandes empresas en desmedro de las pequeñas, Daniel Artana mostraba un artículo de una revista de negocios, que a su vez se basaba en un documento de trabajo de FIEL en el que él había participado, y donde se afirmaba que era errónea la creencia de que las PYMES son generadoras de puestos de trabajo.

Otra de las instituciones que resultaron fundamentales para el respaldo y la difusión del ideario neoliberal fue el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IEERAL, más adelante renombrado como IERAL) de la Fundación Mediterránea (FM). La FM surgió en 1977 por iniciativa de los empresarios Piero Astori, Piero Venturi y Fulvio Pagani, quienes reunieron el apoyo de un grupo de empresas de Córdoba para crear un centro de estudios que fuera el equivalente de FIEL en el interior del país, pero que estuviera orientado a

defender los intereses económicos de la región mediterránea frente a los proyectos metropolitanos. Así, FM-IERAL constituía un mix entre el tanque de ideas y el grupo de presión, rostros que se complementaban. El elegido para dirigir el IERAL fue Domingo Cavallo, un contador público de Córdoba que acababa de obtener su doctorado en Economía en Harvard y que ya tenía relaciones con varios de los empresarios fundadores desde la época de la dictadura de Onganía, cuando se había desempeñado en la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento y en el Banco de Córdoba. Muy pronto, la FM estableció sedes en otras provincias argentinas y vio aumentar su capacidad de influencia en ciertos círculos empresariales.

Durante el gobierno de facto de Roberto Viola, Cavallo y otros economistas del IERAL fueron llamados a colaborar con el general Liendo en el Ministerio del Interior. Durante el forzado “alejamiento por enfermedad” de Viola, Liendo asumió como presidente provisional; esos días fueron aprovechados por Cavallo para lanzar algunas medidas cambiarias que despertaron revuelo por estar orientadas a beneficiar a ciertos grupos económicos. Después de la guerra de Malvinas, el general Cristino Nicolaidis recomendó la gente del IERAL al último presidente de facto, Reynaldo Bignone. Cavallo fue designado presidente del Banco Central, desde donde emitió una serie de circulares que permitieron la licuación de parte de las deudas de las empresas privadas (este proceso de licuación continuaría con sus sucesores en el cargo). Fue en ese entonces que Cavallo se trenzó en un debate con neoliberales de renombre, entre ellos Álvaro Alsogaray, Roberto Alemann y hasta el propio ministro de Economía de Bignone, el ex FIEL José María Dagnino Pastore. Cavallo acusó a sus opositores de ser defensores de la “patria financiera” y enemigos de la Argentina productiva. Aunque algunos ven en este encontronazo una lucha ideológica (entre sectores “tradicionales” y “pragmáticos” o entre “verdadero liberalismo” y “neoliberalismo”), lo cierto es que, en este caso, los argumentos de cada uno de los bandos estaban basados en distintas corrientes del neoliberalismo (una visión más cercana a la Escuela de Virginia en Cavallo y una claramente deudora de la Escuela de Austria en Alemann y

Alsogaray) y estaban orientados a defender intereses concretos (los de las empresas endeudadas en dólares en un caso y los del sector financiero en el otro).

Con la llegada de la democracia, varios profesionales del IERAL se acercaron a los partidos políticos provistos de ideas y proyectos. En el caso de Cavallo, gracias a los contactos de la FM con el futuro gobernador José de la Sota, hubo una aproximación con el justicialismo que le permitió ser candidato extrapartidario a diputado en 1987. Esa relación entre el peronismo y la FM rendiría sus frutos más importantes en 1989, cuando Cavallo y su entorno se sumaron al gobierno encabezado por Carlos Menem.

Una institución algo distinta del IERAL y FIEL es el CEMA, que comenzó a funcionar oficialmente en 1978. En su fundación participaron empresarios y banqueros como Domingo Catena, Mario Hirsch, Ricardo Zinn y los hermanos Rohm, pero esta vez la idea parece haber surgido más de intelectuales que seguían la orientación de la Escuela de Chicago (como Pedro Pou) que de los financiadores.

Lo que desde el comienzo distinguió al CEMA fue una profunda vocación académica, algo que era despreciado por otras instituciones neoliberales (con la excepción del CDEL-ESEADE), que privilegiaban los trabajos con implicancias prácticas precisas. Esta inclinación del CEMA se plasmó en la pronta creación de un centro universitario de posgrado —que sirvió para aportar fondos a la entidad— y en la edición de documentos de trabajo con un contenido teórico más profundo y realizados con un perfeccionismo técnico propio de las casas de altos estudios. Sin embargo, eso no impidió que el CEMA tuviera también una “pata en la política” y tejiera relaciones con distintos gobiernos.

Durante la presidencia de Videla, varios de los economistas del CEMA se unieron al PRN, donde fueron bien recibidos por su capacidad técnica y la claridad que tenían a la hora de diseñar instrumentos para la implementación de políticas concretas, especialmente las relacionadas con los temas monetarios y financieros. Con la llegada de la democracia, el CEMA se concentró mucho más en la actividad académica, pero no descuidó los contactos

con empresas y sumó una serie de lazos con comunicadores sociales, políticos y líderes de opinión. También se dedicó a reforzar sus equipos técnicos y a llevar adelante un amplio conjunto de estudios, tanto de coyuntura como de fondo. Al igual que sucedió con los profesionales de la FM-IERAL, estas iniciativas les permitieron a los miembros del CEMA ocupar los puestos más importantes durante los años del menemismo.

El apoyo de las empresas y corporaciones privadas fue crucial para que surgieran y se consolidaran instituciones como la FIEL, el CEMA y la FM. Pero, al mismo tiempo, el soporte intelectual que estas instituciones otorgaron a ciertas empresas fue fundamental para que las mismas accedieran a contactos con políticos, líneas de crédito internacionales y un amplio conjunto de saberes cuya incorporación se fue haciendo cada vez más necesaria para estar a tono con una economía que se iba globalizando y tecnificando. Por otra parte, los intelectuales que decidían participar, por convicción o por conveniencia, en una de estas instituciones veían potenciados no sólo sus ingresos, sino también sus carreras como profesionales. Se produjo, entonces, un intercambio de ventajas que se retroalimentaba y que servía para reforzar la difusión de las ideas neoliberales, que fueron expandiéndose por el tejido social.

Por otra parte, la permeabilidad de los elencos gubernamentales a los hombres y las ideas de este tipo de instituciones implicaba la aceptación de una lógica sencilla: ellos eran los interlocutores ideales para obtener acuerdos con los grupos empresarios y con los organismos multilaterales de crédito. Y ello no sólo por su capacidad técnica, sino porque sus vínculos con ejecutivos, accionistas y funcionarios internacionales eran estrechos no sólo a nivel profesional. Muchas veces, el director de una empresa o el delegado del FMI encontraban en los funcionarios provenientes de la FM, el CEMA o la FIEL a un ex compañero de estudios, a un viejo colega de trabajo o incluso a un amigo personal.

A comienzos de los años 80, algunos referentes de las fundaciones y centros de estudios abandonaron sus organizaciones madre para formar sus propias consultoras económicas; no obstante, eso

no les hizo perder contactos con sus colegas ni apartarse de los objetivos que habían estado persiguiendo. Por el contrario, el florecimiento de estudios privados y agencias de consultoría sirvió para reforzar un entramado complejo que sustentaba el ideario neoliberal. En este entramado participaban, además de las instituciones como el CEMA y las consultoras privadas, los centros y foros de las corporaciones empresarias como el Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino (IDEA), el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la SRA, que organizaban periódicamente reuniones, coloquios, congresos y exposiciones que servían para presionar sobre la agenda de los gobiernos y para mostrar a la sociedad el “sentir” de las clases dirigentes.

Esto no quiere decir que todos los profesionales y sectores dijeran exactamente lo mismo o que se basaran en las mismas teorías; lejos de ello, se oponían encarnizadamente unos a otros, ya fuera por cuestiones políticas, pecuniarias, ideológicas o personales. Pero estas luchas internas, como las discusiones entre las corrientes neoliberales en los países desarrollados, no impidieron que se mostraran unidos y formaran frentes de acción para reformar la sociedad argentina. Había diferencias, pero coincidían en lo esencial: Argentina estaba en crisis y la única solución era una salida neoliberal. Sólo en los años 90 comenzó a tensarse la relación entre los distintos grupos de la nueva derecha, y ello porque la dinámica del llamado “modelo de la convertibilidad” produjo perdedores incluso entre los que habían estado bregando por el neoliberalismo. Sobre este tema, volveremos en el próximo capítulo.

“Este bombo es liberal”

En el entramado que ayudó a la difusión de las ideas neoliberales, además de organizaciones empresariales y centros de estudios, se destacó sobre el resto de las instituciones un partido político que se mantuvo durante algunos años como el tercero más importante de

Argentina: la UCEDE, creada en 1982 por iniciativa de Álvaro Alsogaray con la idea de “trascender lo meramente electoral”.

En el acto de constitución de la UCEDE, varios oradores se lamentaron de no poder llamarse a sí mismos “liberales” de manera abierta, a causa del descrédito que entonces acarrearba la palabra, que habría sido bastardeada por la política “dirigista y estatizante” del PRN. Alberto Benegas Lynch (h.), por ejemplo, sostuvo que “Martínez de Hoz nunca fue un liberal, fue un gradualista y un pragmático”. Para otros que habían estado vinculados al PRN de forma directa, como Juan Alemann, el ex ministro de la dictadura había sido bienintencionado, pero demasiado permeable a las presiones intersectoriales y muy proclive a abusar del crédito entonces disponible.

Sea como fuera, lo cierto es que el núcleo de la UCEDE se propuso como tarea revertir la imagen que la sociedad tenía de las políticas neoliberales y erigir una estructura que permitiera que algunos de sus dirigentes llegaran al Congreso para representar un pensamiento que estaba ausente de los partidos mayoritarios y, desde allí, ejercer una labor docente hacia el resto de la sociedad. La tarea, que en 1983 parecía ciclópea, se reveló más sencilla a partir de 1985, cuando una agrupación universitaria afín a la UCEDE, la UPAU (Unión para la Apertura Universitaria) comenzó a obtener una seguidilla de triunfos en varias facultades del país. La labor de la UPAU acercó a la UCEDE a cientos de jóvenes militantes que deseaban ampliar los horizontes del partido para hacerlo más popular.

El ingreso de participantes dispuestos a concentrar esfuerzos en las luchas electorales cambió la fisonomía del partido, que dejó de privilegiar de forma exclusiva la política testimonial y “de contactos” que había caracterizado a la derecha argentina. Como resultado, amplios sectores de clase media urbana se sumaron a las propuestas liberales e incluso hubo un movimiento villero liberal. Durante algún tiempo, los viejos dirigentes trataron que el partido se cerrara sobre sí mismo, pero acabaron rindiéndose ante una renovación que parecía tener la fuerza suficiente para llevar las ideas neoliberales a un lugar protagónico. Se cuenta que en un acto, mientras hablaba Benegas Lynch, comenzó a sonar un bom-

bo; el orador, enojado, exigió silencio, la Juventud Liberal respondió: “Este bombo no es igual, este bombo es liberal”.

Entre 1985 y 1989, la UCEDE fue incrementando de manera acelerada su caudal electoral, en parte por la militancia de la rama juvenil, por la reescritura de la historia argentina que habían hecho sus dirigentes (que lograron separar las políticas del PRN del “auténtico” liberalismo que ellos proponían), por los problemas que presentaban los partidos mayoritarios, por el atractivo de algunos de sus nuevos rostros, pero sobre todo por su eficiencia para comunicar su mensaje e insertarlo dentro del “haz moral-modernizador” que se irradiaba desde las instituciones de estudios y los foros empresariales.

El éxito electoral de la UCEDE se produjo rápidamente, pero también fue rápida su caída. A partir de 1989, cuando sus principales dirigentes se integraron al gobierno de Carlos Menem, la UCEDE comenzó un proceso de descomposición acelerada. Ya en los años 90, el partido tuvo una existencia apenas nominal, pero muchos de sus líderes y adherentes (como Adelina Dalesio de Viola y Germán Kammerath) siguieron integrados a estructuras políticas nacionales, provinciales y municipales. El proyecto de la UCEDE fracasó sólo en parte; si bien la idea de un gran partido de derecha tuvo que ser descartada, los objetivos fundacionales de reorientar a la sociedad hacia ideas y prácticas neoliberales se alcanzaron con creces.

Discurso y propaganda

Para dotar de atractivo al paradigma neoliberal, sus principales difusores se encargaron de “traducirlo” a un discurso que, si bien no es del todo coherente, se presentó como una alternativa sólida a los modelos que imperaban antes de su surgimiento. Empero, no se trata de un discurso único y global. En cada país se introdujo lo que podríamos llamar una adaptación local, diseñada especialmente para responder a las inquietudes de una sociedad en concreto.

Siguiendo –con leves modificaciones– el trabajo de Gastón Beltrán sobre los intelectuales neoliberales, se puede afirmar que los intelectuales de la nueva derecha argentina se sirvieron de dos ideas-fuerza como dispositivos ideológico-discursivos: necesidad y futuro. En efecto, estas dos ideas, entrelazadas con el vocabulario de la teoría neoliberal y “empaquetadas” en eslóganes sencillos y dicotómicos fueron las herramientas principales para difundir la política neoliberal en Argentina. De hecho, las ideas de necesidad y futuro se mostraron tan fuertes que, durante el momento de auge-crisis del modelo neoliberal (sobre el que hablamos en el próximo capítulo), aun los actores que eran perjudicados por el neoliberalismo no podían escapar de su red ideológica-discursiva y se veían obligados a exponer sus demandas en términos neoliberales.

Los neoliberales argentinos presentaron su discurso como una cuestión científica y, por ello, sus conclusiones tendieron a aparecer como necesarias e inapelables. Su saber, técnico o teórico, aparecía respaldado por sus títulos en universidades prestigiosas (Harvard, MIT, Chicago, Yale, Princeton) y se ponía en contraposición con los “eslóganes vacíos del populismo” y con los “intereses de la clase política”. Este saber presuntamente científico era lo que permitía a los neoliberales distinguir qué estaba pasando (una “crisis permanente de una gravedad inusitada”), cuáles eran las causas de la crisis (un “Estado agobiante que no dejaba lugar a la iniciativa privada”) y cuáles las medidas que era imperioso adoptar (“una auténtica salida liberal” que le diera “aire al mercado”). Los intentos de oponer un visión distinta a la neoliberal eran inmediatamente descartados como inconducentes, porque “no estaban basados en la realidad” o “no estaban elaborados con los instrumentos de la ciencia económica moderna”. Para los neoliberales, quienes no aceptan la “fuerza de los hechos” –es decir, quienes no ven la necesidad de la reforma neoliberal– son entonces personas equivocadas, confundidas, ilusas, voluntaristas o lisa y llanamente incapaces. En suma, los neoliberales planteaban una disyuntiva de hierro: o se reconocía la realidad y se aceptaba la necesidad de un cambio profundo o se persistía en el camino al abismo al que de forma ineluctable lleva la política estatista.

La otra idea-fuerza que acompañó a la de necesidad fue la de futuro; un futuro que aparecía “al alcance de la mano” y que tenía la capacidad mágica de resolver todos los problemas y responder a todos los anhelos. En efecto, el discurso neoliberal se presentó como lo moderno, lo joven, lo dinámico y lo exitoso y se contrapuso a “la conocida cantinela del populismo”, “las gastadas políticas estatistas”, “el socialismo que fracasó en todo el mundo”, “los viejos dirigentes de siempre” y “los intereses enquistados en el poder”. Como vimos, muchos neoliberales, aun aquellos que participaron en el PRN, afirmaron que en Argentina (salvo durante la época de la generación del 80) nunca hubo “verdadero liberalismo”. Por eso, el resurgimiento de la democracia era el momento para retomar ese camino perdido y volver a la buena senda; de ese modo se podría aspirar a ingresar al “primer mundo”, al “destino de grandeza que Argentina se merece”. La necesaria reforma neoliberal permitiría que el país ingresara en un futuro de libertad, bienestar económico y modernización constante; en consecuencia, quienes se oponían eran los que deseaban anclar a la sociedad en el pasado y el fracaso.

Gracias a estas dos ideas-fuerza (necesidad y futuro), el neoliberalismo pudo forjar una identidad política unificadora, que aglutinó un amplio arco de intereses. Esta identidad fue definida, lógicamente, a partir de aquello que el neoliberalismo rechazaba. A diferencia del neoliberalismo norteamericano, que tiene como contraparte al *liberalism*, del francés, que buscó oponerse al *dirigisme*, del mexicano, que dice querer enfrentar al *centralismo*, del chileno, que surge como respuesta al *socialismo*, o del inglés, que se construye contra el *Welfare State*, el neoliberalismo argentino se erigió como alternativa al *populismo*. Según la nueva derecha argentina, el populismo está formado por los movimientos políticos que tergiversan los valores tal como son definidos por el lenguaje neoliberal. Esto es: para el neoliberalismo, no sólo son populistas los que se resisten a la reducción del gasto público o a las privatizaciones, sino los que piden que se distribuya, los que piensan que la igualdad es un valor deseable, los que se oponen a que el mercado rija la sociedad, los que anteponen los derechos sociales

al derecho privado y los que creen que la democracia debería ser algo más que un método para elegir gobernantes.

De este modo, durante el gobierno de Alfonsín, la compleja teoría neoliberal fue propagandizada en dicotomías apremiantes: lo que dicen los políticos versus la realidad; el pasado versus el futuro; la pobreza presente versus la abundancia del mañana; la ineficiencia de las empresas estatales versus la rapidez de las empresas privadas; el inmovilismo de lo público versus el dinamismo de lo privado; la miseria del tercer mundo versus la abundancia del primero. Estos eslóganes, a su vez, se podían traducir fácilmente en propuestas políticas concretas, como privatizaciones (que traerían eficiencia en la provisión de servicios), menor presión impositiva y regulatoria (que facilitaría la iniciativa privada), seguridad jurídica para la propiedad privada (que atraería inversiones genuinas), apertura comercial y financiera (que facilitaría el crédito y domaría la inflación), desmantelamiento de la seguridad social (que daría libertad a los ciudadanos para elegir su cobertura), debilitamiento del sindicalismo (que posibilitaría un clima de convivencia republicano y liberal) y flexibilización laboral (que aumentaría el nivel de empleo).

Durante los años 80, ideas, eslóganes y recetas neoliberales fueron publicitados no sólo por las instituciones y los partidos que adscribían al neoliberalismo, sino también por gran parte de los medios de comunicación, cuyos dueños, directivos o empleados se abocaron (muchas veces con la fruición de los conversos) a la tarea de difundir el nuevo credo. En algunos casos, como el de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en el programa de televisión *Tiempo Nuevo*, el trabajo se llevó a cabo de forma desembozada. Pero también hubo otros en los que la difusión se realizó de manera más solapada (y esto no implica deshonestidad), como la proliferación de noticias sobre la ineficiencia de los servicios públicos argentinos o los reportajes sobre las comodidades de la vida cotidiana en los países desarrollados.

Un elemento que resultó crucial en el éxito del discurso neoliberal fue la *idea* de crisis. Desde la óptica neoliberal, Argentina

está en crisis desde hace décadas (desde la Ley Sáenz Peña, desde el golpe de 1943, desde el triunfo del peronismo, desde el fracaso de Frondizi...). Se trata, dicen, de una crisis “permanente”, “de larga duración”, “estructural”; de ahí la idea de una solución que implique medidas drásticas. Pero se trata también de una crisis urgente que requiere que las iniciativas de reforma sean tomadas de manera acelerada, aun si ello implica desprolijidades o inequidades. Por supuesto, la *idea* de una crisis profunda, continua y apremiante no podría haberse establecido sin una situación *real* en la que esos temores se materializaban día a día, como la que se plasmó a partir del deterioro económico, social, político e institucional que padeció Argentina en las últimas décadas y que alcanzó su punto más álgido y cruel en la hiperinflación de 1989.

Auge y crisis del neoliberalismo argentino

La historia del neoliberalismo durante los años 90 es el trazado de un recorrido en el que el auge y la crisis se retroalimentaron constantemente: a mayor profundidad de la crisis siguió más neoliberalismo, y a más neoliberalismo siguió siempre una crisis de mayores dimensiones, que a su vez requería como “única solución” mayores dosis de neoliberalismo. A medida que se desarrollaba este ciclo de auge-crisis neoliberal, el tejido social, político, económico e institucional de Argentina se volvió cada vez más frágil, lo que dificultó aun más la generación de alternativas y facilitó que se impusiera una versión criolla del TINA (*There is not alternative*) de Margaret Thatcher.

Hombres en pugna

Los últimos meses del gobierno de Alfonsín y los primeros del de Menem marcaron a fuego la historia argentina. Si por un lado, con el traspaso de mando de un presidente constitucional a otro, se logró dar con éxito el primer paso de la transición democrática, las circunstancias no eran las anheladas por la sociedad argentina.

Cirugía mayor sin anestesia

La crisis permanente de la que los neoliberales venían hablando desde la asunción de Alfonsín comenzó a plasmarse con crudeza a fines de 1988, con el fracaso del Plan Primavera. Los días del radicalismo en el gobierno estaban contados; lo que los neoliberales debatían entonces era si sería o no conveniente imponer de inmediato su proyecto, aprovechando la situación de necesidad en la que se encontraba Alfonsín, o esperar a que la crisis madurase lo suficiente como para que las ideas neoliberales se impusieran por su propio peso. Se reeditaba así una discusión que se había dado

en 1976 con respecto a la oportunidad del golpe de Estado. En ese entonces, mientras una parte de la sociedad urgía a los militares a tomar el poder de forma inmediata, varios neoliberales (como Martínez de Hoz y Alsogaray) sostenían que era necesario esperar a que el gobierno se cayera solo; únicamente de este modo, pensaban, la sociedad aceptaría las drásticas medidas que eran necesarias. A comienzos de 1989, la discusión era la misma. Por un lado, algunas corporaciones, como la SRA, urgían al gobierno a tomar medidas; desde la TV, Neustadt le sugería a Alfonsín que usara el “lápiz rojo” de Angeloz (haciendo referencia a un eslogan del candidato radical que afirmaba estar listo para cerrar reparticiones públicas). Pero, al mismo tiempo, economistas de instituciones neoliberales como Cavallo (FM-IERAL) y Roque Fernández (CEMA) llamaban a no apresurarse. Para ellos, el neoliberalismo sólo podía ser exitoso si era aceptado por la sociedad y la dirigencia política; sólo así las reformas necesarias serían el resultado de leyes y acuerdos duraderos, algo que ni el gobierno de Alfonsín ni la situación económica de ese año podían garantizar.

En 1989, con la hiperinflación, la situación llegó al nivel de gravedad que de algún modo se había estado esperando. La sociedad se encontró a sí misma al borde del abismo y estuvo más que dispuesta a aceptar la solución neoliberal que desde hacía años había estado publicitándose y que, según sus impulsores, traería soluciones sencillas y rápidas. La crisis (económica, social, política e institucional) de 1989 sirvió entonces como evento disciplinador. A semejanza del estado de naturaleza de la teoría política contractualista, el caos imperante parecía exigir un cambio capaz de instaurar un nuevo orden, y los neoliberales se mostraban como los más preparados para llevarlo a cabo. En ese sentido, el anuncio de Menem de que estaba dispuesto a ejecutar una “cirugía mayor sin anestesia” capaz de poner un freno al descalabro no produjo inquietud sino que llevó alivio a buena parte de la población.

Con esto no se quiere suscribir una teoría conspirativa, que circuló en el radicalismo, según la cual la hiperinflación (cuyo cenit se produjo después de las elecciones) fue parte de un plan para hacer caer a Alfonsín. Tal como apunta Marcos Novaro, la

crisis hiperinflacionaria obedeció a una multiplicidad de causas (sobre las que no podemos extendernos aquí) y en ella intervinieron varios actores cuyas acciones —en principio descoordinadas— se sobredimensionaron ante la ausencia de un poder político capaz de ofrecer alternativas o de movilizar recursos para sostener la moneda que había creado y la paz social que siempre buscó preservar.

Ante la imposibilidad del Estado de dar una respuesta a la situación y la ausencia de alternativas viables, el discurso neoliberal se impuso sin mayores escollos. Eso facilitó que Menem, en ese entonces candidato triunfante, fuese revelando a la sociedad que el “salariazó” y “la revolución productiva” que había prometido en la campaña venían de la mano de una alianza con la nueva derecha argentina; una alianza que, contra lo que se pensó en ese momento, venía gestándose desde hacía tiempo, tal como lo mostró Antonio Camou en un interesante trabajo cuyas líneas principales han sido confirmadas por distintos testimonios.

El coordinador político de la Comisión de Economía de Menem era Eduardo Bauzá, que había sido parte de la línea interna fundada por Menem, “Federalismo y Liberación”, y que tenía fluidos contactos personales con la estructura del CEMA, ya que Pedro Pou era su primo y amigo. De la comisión participaban Guido Di Tella, Eduardo Curia, Rodolfo Frigeri, Marcelo Diamand y Roberto Lavagna. Entre estos economistas había discrepancias con respecto al rol que el Estado debía tomar a partir del nuevo gobierno justicialista. Por un lado, Lavagna, Diamand, Frigeri y Curia se inclinaban a resaltar la necesidad de reservar al Estado un papel relevante, sobre todo mediante la implementación de políticas activas de acción social y de incentivos a la producción. Por el otro, Cavallo y Di Tella se mostraban más proclives a llevar adelante un plan ortodoxo, capaz de generar un “shock de confianza” en los actores económicos. Pero, más allá de estas diferencias, toda la comisión parecía coincidir en la necesidad de “aceptar la realidad” tal como era descripta por el pensamiento neoliberal, lo que a su vez la llevaba a recomendar un *aggionamiento* doctrinal que incluyera privilegiar una economía abierta y orientada a la exportación (y no cerrada y orientada al mercado interno, como era

tradición en el peronismo), cuidar celosamente el equilibrio fiscal y llevar adelante un redimensionamiento del Estado que incluyera un ambicioso plan de privatizaciones.

Como es sabido, en cuanto tomó la presidencia Menem prefirió (o la crisis lo obligó a elegir) el “shock de confianza” de Cavallo y Di Tella al enfoque más gradual de Curia y Lavagna. Pero, de hecho, llevó las cosas aun más lejos al sobrereactuar permanentemente su conversión, tal como lo mostraron Palermo y Novaro en su libro sobre el menemismo. Menem no se limitó a seguir las recomendaciones de sus asesores más cercanos al paradigma neoliberal, sino que llamó a los referentes más destacados de esa corriente a formar parte de su gobierno. Primero a través de Miguel Roig y Orlando Ferreres, directivos del holding Bunge & Born (de gran contenido simbólico negativo para el peronismo) y economistas del CEMA. Luego a través de un acuerdo (primero personal y luego partidario) con los líderes de la UCEDE (como Álvaro y María Julia Alsogaray), a quienes ubicó en puestos de primer orden. Más tarde, a través de gestos políticos (como el abrazo a Isaac Rojas, líder del ala más dura del golpe de Estado que había derrocado a Perón) destinados a recalcar su decisión de ir “hasta las últimas consecuencias” en el cambio de rumbo. Finalmente, a través de medidas concretas que, en forma desordenada (incluso escandalosa) pero rápida, concretaban la agenda que habían venido impulsando los neoliberales.

De nada sirvió que los radicales y un puñado de peronistas descontentos denunciaran los actos de corrupción y los manejos oscuros presentes en cada una de las reformas estructurales. En unos afiches aparecidos en la época, se comparaban las prolijas propuestas de privatización que había hecho Terragno con las desordenadas privatizaciones que llevaba adelante Menem. Pero la clave de la aceptación popular y del beneplácito de la nueva derecha con el nuevo gobernante estaba bien expresada en aquellos carteles: el radicalismo había intentado hacer reformas y había fracasado, el peronismo las estaba haciendo realidad.

Sinuoso camino al primer mundo

Al poco tiempo de asumir como ministro de Economía, Miguel Roig falleció de un paro cardíaco. Menem redobló la apuesta y le pidió a Jorge Born III, la cara más visible de Bunge & Born, que le proporcionara otro de sus hombres. La responsabilidad cayó sobre Néstor Rapanelli (el viceministro, Ferreres, siguió en funciones), quien en principio se limitó a seguir adelante con las propuestas de su colega fallecido. Por un lado, tipo de cambio fijo (en principio equilibrado con el mercado paralelo), aumento de salarios con una retribución fija y congelamiento de precios. Por el otro, una suba de tarifas públicas del 600% y un plan de privatizaciones, desregulaciones y reforma tributaria. Aunque los dos primeros meses del plan BB (como se lo conoció entonces) parecían augurar un período de estabilidad, en octubre de 1989 un aumento de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo hizo saltar las alarmas. Siguió algunas semanas de incertidumbre en las que los indicadores económicos empeoraban de modo sistemático. Finalmente, en diciembre el ministro anunció “correcciones” en la paridad cambiaria que no hicieron más que abonar un pánico financiero y decidieron el fin del experimento comandado por el más importante de los capitanes de la industria.

Al sellar su alianza con Bunge & Born, Menem había elegido no sólo sobreactuar su perfil pro-mercado, sino también continuar con la política de acercamiento del Estado con los líderes de los grandes grupos económicos nacionales que había comenzado con Alfonsín. Sin embargo, los empresarios que se insertaron en el gobierno no tuvieron la capacidad (o la voluntad) de proponer un plan que contentara a todos los sectores favorables a las reformas. Las luchas internas en el gabinete, la oposición del capital financiero y el rechazo de los propios capitanes de la industria que no veían a Rapanelli como uno de los suyos, sino como un hombre de uno de sus competidores, terminaron por sellar la suerte del remedo de burguesía nacional que había surgido tras el Proceso.

A Rapanelli lo siguió Antonio Erman González, contador, amigo personal de Menem y militante de la democracia cristiana.

Su gestión se abrió con la liberación del mercado cambiario y un canje forzoso de depósitos a plazo fijo en australes por bonos en dólares que buscaba, como explicó Alsogaray, “el saludable objetivo de evitar la emisión sin respaldo que genera inflación”. Aunque la idea era “planchar” la demanda de dólares y bajar la inflación, en poco menos de un mes los indicadores económicos se dispararon nuevamente. Pese a todo, en marzo de 1990 un decreto presidencial llevó tranquilidad a los operadores financieros (o “los mercados”, como empezó a llamárselos entonces). En la disposición titulada “Programa de estabilización económica y de reforma del Estado”, el gobierno dispuso una batería de medidas destinadas a restringir el gasto público (topes salariales, cese de contrataciones, prohibición de financiamiento del déficit operativo) y profundizar la reforma del Estado (intervención del Banco Nacional de Desarrollo, actuación conjunta de los Ministerios de Economía y de Obras y Servicios Públicos en las privatizaciones). A partir de allí, la economía pareció estabilizarse. Parte de esa tranquilidad se debió a que González y Roberto Dromi (de Obras y Servicios Públicos) habían encontrado una fórmula de privatización en la cual tanto los capitales transnacionales como los grandes grupos económicos y los “nuevos inversores” extranjeros podían llevarse una tajada. Lo peor de la lucha al interior del capital concentrado parecía haber pasado y la reforma neoliberal ya había edificado sus cimientos más importantes.

Crisis para un plan

En diciembre de 1990, González se vio cercado por una suma de escándalos políticos (“la carpa”, el “*swiftgate*”, el “reconocimiento” a Martínez de Hoz) que no hicieron más que agravar una situación de debilidad originada en luchas palaciegas. A pesar de que la inflación parecía domada, en la víspera de Navidad el dólar comenzó a dispararse. Cuatro días después, el ministro renunciaba y comenzaba el tiempo de Cavallo.

Aunque al comienzo el nuevo ministro se mostró prudente, su propuesta de una banda cambiaría por encima de la que en ese

momento imperaba en el mercado dejó en claro que tenía planeado provocar cambios. En un par de meses comenzó a tomar medidas que, en lugar de alejar la crisis, parecían foguearla. Según comentaría Javier González Fraga (ex presidente del Banco Central), al pedir al intendente de la ciudad de Buenos Aires que cancelara todas las deudas de la administración pública, Cavallo produjo una situación de liquidez que disparó nuevamente el dólar. El peligro de otra hiperinflación parecía inminente. Fue en este contexto de “abismo a la vista” que logró la inmediata aprobación del “Plan de Convertibilidad”. Es decir, se buscó nuevamente aumentar las chances de medidas radicalmente neoliberales a través del empeoramiento de la economía, señalando como causas de la crisis la falta de profundidad de la reforma neoliberal, que ahora (y ese ahora era eterno) debía comenzar en serio.

Los lineamientos fundamentales de la convertibilidad ya habían sido discutidos en el seno de la Comisión de Economía coordinada por Bauzá y eran alentados por economistas neoliberales norteamericanos que adscribían a la Escuela de Virginia, como Steve Hanke. Pero en su búsqueda por imponer el plan por la vía de la crisis, Cavallo estableció una paridad cambiaria donde el austral/peso estaba sobrevaluado, generando las condiciones para un modelo de apertura económica “de afuera hacia adentro” donde el endeudamiento externo jugaba un papel primordial. Así, la estabilidad se recuperó a un costo altísimo, que Argentina debió ir pagando cada vez más caro.

En esencia, la convertibilidad establecía una sistema de caja de conversión por el que la autoridad política perdía la capacidad de control de la economía por *dos* vías. Por un lado, a nivel formal, se obligaba a respetar el alejamiento del gobierno de la política monetaria. Esta imposibilidad de intervención futura llevó a que se produjeran tempranos llamados para que la política se metiera en la economía una última vez para corregir la convertibilidad antes de provocar un desequilibrio que pusiera al país en una encerrona. En 1993, el mismo Cavallo pareció acariciar esa idea al proponer por primera vez la idea de una canasta de monedas, es decir, la ampliación de la convertibilidad a otras unidades además

del dólar (se trata de la misma medida que provocaría la hecatombe de 2001). Sin embargo, allí se puso en movimiento la segunda y más poderosa línea de defensa del plan: la propia política se negaba a intervenir, siquiera para realizar los cambios más leves a un sistema que tenía la aprobación de una enorme porción de la sociedad. Fue esta aprobación social, sumada a la convicción de que la reforma era, como se había predicado durante años, “necesaria”, la que impidió que aun los sectores con capacidad de organización y respuesta, como las corporaciones empresarias, se abstuvieran de criticar al modelo.

Otro factor que influyó en la ausencia de críticas al modelo de convertibilidad fue la pronta afluencia de dinero al país. Una parte de ese dinero se componía de inversiones que buscaban participar de las privatizaciones o comprar las muchas empresas nacionales que se pusieron a la venta. Otra parte venía a especular, aprovechando las altas tasas de interés en pesos convertibles. Otra, finalmente, llegaba por medio de préstamos externos que condicionaban aun más la escasa capacidad de acción del gobierno.

Al comenzar el gobierno de Menem, la deuda externa orillaba los 62.000 millones de dólares. En 1992, luego del ingreso argentino al Plan Brady (que permitió a los bancos canjear su acreencias por bonos que, independientemente de su valor de mercado, eran tomados nominalmente por el gobierno argentino) negociado por Cavallo y Daniel Marx, la deuda subió a 72.000 millones, a pesar del “rescate” de deuda por vía de la aceptación de bonos como pago por las empresas públicas privatizadas.

Así, tal como lo advirtió entonces Juan Carlos de Pablo, la Argentina de comienzos de los 90 se parecía cada vez más a la de fines de los 70: tipo de cambio fijo en términos nominales, importaciones mayores a las exportaciones, liquidez en los países centrales que facilitaba el endeudamiento y bienes cuyos precios subían por encima del valor del dólar. Pero si por un lado De Pablo, admirador y amigo de Cavallo, admitía las similitudes, por el otro resaltaba las diferencias económicas (que, como la reducción del déficit, no se verificaron) y, más importante aun, políticas entre los dos momentos. En la visión del ex economista de FIEL

(y de muchos otros neoliberales), una de las causas del fracaso de la “tablita” de Martínez de Hoz fue la acechanza de Viola y Sigaut como sucesores que no respetarían el modelo de apertura. Ese problema no se repetiría, dijo De Pablo en 1994, porque “con la reelección de Menem a la vista... el horizonte político interno del mantenimiento de la política económica aparece claro por años”. De este modo, se admitía que, tal como lo pregonaban las visiones neoliberales, el “secreto del éxito económico” seguía estando en la política, o, mejor dicho, en la *ausencia* de política.

El consenso argentino

Una vez impuesta la convertibilidad se pusieron en movimiento una serie de mecanismos políticos que exigían profundizar el modelo frente a cada cimbronazo de la economía argentina o mundial. En la Argentina de los 90, prácticamente todos los actores relevantes (empresas, trabajadores organizados, corporaciones, instituciones de producción y difusión del conocimiento, partidos políticos y medios de comunicación) parecían haber llegado a un acuerdo con respecto a que ni las reformas estructurales (apertura económica, desregulación de mercados, privatizaciones, reformas en la seguridad social) ni el Plan de Convertibilidad (que actuaba como mascarón de proa del modelo) deberían tocarse.

Perdedores y ganadores unidos

A pesar de que todo indicaba que –por tradición o intereses– las corporaciones tradicionales del trabajo, la industria y el agro reaccionarían contra el neoliberalismo, sus protestas, cuando existieron, apenas pasaron de reclamos puntuales y sectoriales en busca de una mejor posición *dentro* del modelo, tal como lo demostró Ricardo Sidicaro en sus trabajos sobre los 90.

Una parte importante de los dirigentes sindicales optó desde el comienzo por aceptar el rumbo encarado por “su” partido; de

hecho, el histórico secretario general de los plásticos, Jorge Triaca, líder del grupo “dialoguista” (llamado así por su inclinación a pactar con empresarios y gobiernos) fue el primer ministro de Trabajo de Menem. Por supuesto, eso no impidió que, a medida que el gobierno avanzaba en su plan de reformas, recrudesieran las tensiones al interior del movimiento obrero al punto de generar una ruptura en cuatro grupos. Por un lado, los que serían llamados “sindicatos menemistas”, que apoyaban el modelo en un 100% tentados por una serie de acuerdos con el Estado, y los “gordos” (sindicatos con una importante cantidad de afiliados), que buscaron “negociar” la supervivencia de una parte del esquema anterior a cambio de no entorpecer la marcha del modelo. Por el otro, los “históricos”, que buscaron devolver al sindicalismo el rol protagónico que estaba perdiendo mediante una oposición más frontal pero no cerrada a la negociación, y los “progresistas”, mayormente sindicatos de empleados estatales de orientación socialcristiana, que plantearon un enfrentamiento total con el neoliberalismo. Así, con la excepción del último grupo (que se separaría de la CGT para formar la Central de Trabajadores Argentinos, CTA), los sindicatos ofrecieron su acuerdo con el modelo neoliberal. Con el correr de los años, ese acuerdo se fue desdibujando y una parte importante del sindicalismo pasó a oponerse más frontalmente al gobierno, sobre todo a partir de los repetidos intentos (fracasados) de imponer una reforma laboral de acuerdo con las exigencias de la nueva derecha argentina. Sin embargo, para entonces muchas de las reformas más importantes que afectaban al sector (como la reglamentación del derecho de huelga) ya eran una realidad.

En el sector industrial, la UIA ofreció desde el comienzo su apoyo a reformas que desde hacía años venía impulsando. Sin embargo, sus miembros y directivos pronto cayeron en la cuenta de que el modelo por el que habían abogado no los beneficiaba en la medida que habían esperado y que, en algunos casos, era completamente perjudicial. Para paliar esta situación, la UIA comenzó a actuar por dos vías, a las que podemos llamar de intervención y de prescindencia.

Por un lado, los industriales propusieron una serie de intervenciones del Estado en su favor. Estas intervenciones, se aclaraba en sus documentos, no debían entenderse como una discrepancia con el modelo, sino como una serie de acciones “necesarias” para que la economía creciera y se evitara un estancamiento perjudicial para todo el país. Lo que pedía la UIA eran incentivos que ayudaran a dar al modelo (al que, hay que insistir, no se cuestionaba) un tono más productivista; por eso se proponían exenciones impositivas, mayores obras públicas, transferencias gratuitas de tecnología, capacitación de la mano de obra a cargo del Estado, tarifas especiales para los servicios públicos (que ahora estaban en manos de empresas privadas), estatización de las deudas financieras de las empresas y una larga serie de medidas activas. Por el otro lado, se pedía que el Estado “se retirase”, tal como se anunciaba en la publicidad oficial. Para ello era necesario que no fuera tomador de crédito, ya que eso hacía subir las tasas de interés a las que tenían que someterse las empresas. También era imperioso, decía la UIA, disminuir la “tremenda presión fiscal” que “ahogaba” la iniciativa privada y terminar de una vez por todas con la “vetusta legislación laboral” que impedía que “trabajadores y empresarios lleguen a acuerdos libres sin intermediación del Estado o de las corporaciones”.

Similar al de los industriales fue el caso de las entidades que representan los intereses de los productores agropecuarios, como la SRA. Ellos también se mostraban “de acuerdo con el rumbo de la apertura económica”, pero en disidencia con la parte que les había tocado. Se quejaron del atraso cambiario, pero como se oponían a modificar la paridad entre el peso y el dólar, que habría significado “salir” de la convertibilidad, propusieron medidas similares a las reclamadas por la UIA para mejorar su situación. Por el lado de la prescindencia, los dirigentes agrarios pidieron terminar con el “excesivo fiscalismo” cuyo único motivo, pensaban, era “costear el clientelismo político”. Por el lado de la intervención, pidieron que el Estado subvencionara sus costos operativos (como el valor del combustible y los peajes).

Cabe preguntarse por qué, si los sectores empresarios estaban siendo perjudicados por el neoliberalismo que habían ayudado a implantar, no ofrecieron una alternativa en lugar de correcciones dentro del modelo. Al respecto hay dos explicaciones complementarias. La primera se relaciona con el hecho de que la política llevada adelante por Menem y Cavallo y el atraso cambiario en el que se había incurrido desde el inicio de la convertibilidad afectaban de manera desigual a distintos sectores. Los que contaban con mayor capital y estructura organizativa podían mejorar su productividad mediante la renovación tecnológica y obtener líneas de crédito más accesibles. Además, varios empresarios se habían asociado con quienes más se beneficiaban del modelo: las empresas transnacionales de provisión de servicios públicos. ¿Pero qué pasaba con los “perdedores” que no participaban de estas condiciones? ¿Por qué ellos también aceptaban “el espíritu del modelo”? Porque, como hemos insinuado ya varias veces, estaban “presos” del ideario y el lenguaje neoliberal. Incluso cuando las empresas solicitaban medidas claramente proteccionistas intentaban hacerlo mediante una gramática compatible con el neoliberalismo y que hiciera hincapié en echar las culpas sobre el Estado. Tal como lo ha mostrado John Campbell, es en estas ocasiones cuando el poder de las ideas se muestra en todo su esplendor.

La “retirada” del Estado

A medida que Argentina profundizaba su nivel de endeudamiento y que la economía local se extranjerizaba y concentraba, el Estado fue perdiendo cada vez más capacidad de acción. Y ello por varios motivos convergentes. Por un lado, a los nuevos dueños de las empresas o de concesiones de servicios les interesaba mantener un esquema que les permitía girar ganancias en dólares a sus países de origen. Por el otro, los organismos multilaterales de crédito reforzaron su política de condicionamiento de la economía por medio de “cartas de intenciones” que Argentina firmaba para destrabar la entrada de dinero. Esas cartas estaban siempre orientadas por lo que se llamó el “Consenso de Washington”, un conjunto

de premisas destinadas a establecer reformas estructurales que consolidaran las reformas estructurales en los “mercados emergentes” (como pasaron a llamarse entonces los países en vías de desarrollo).

El Consenso de Washington consistía en diez medidas de política económica: 1) disciplina fiscal; 2) priorización del gasto público en áreas de alto retorno económico; 3) reforma tributaria; 4) tasas positivas de interés fijadas por el mercado; 5) tipos de cambio competitivos y liberalización financiera; 6) políticas comerciales liberales; 7) apertura a la inversión extranjera; 8) privatizaciones; 9) desregulación amplia; 10) protección a la propiedad privada. De este “recetario” se puede deducir uno de los aspectos más interesantes del modelo político neoliberal: al mismo tiempo que se reclama una menor presencia de la *política*, se requiere la generación de un *poder* (autoridad o liderazgo) estable orientado a encarar las reformas con firmeza. Es decir, tal como lo anunciaba la teoría neoliberal, el consenso de Washington y la nueva derecha argentina que ayudó a implementarlo no proponían reducir –ni mucho menos “hacer desaparecer”– al Estado, sino reformarlo (en lo que se refiere a la delimitación de sus tareas legítimas), concentrarlo (en el Poder Ejecutivo) y abstraerlo de la sociedad mediante la autonomización de ciertas instituciones, como el Banco Central, que quedan fuera del control de la sociedad.

Es decir que para el neoliberalismo el problema no es el Estado (que necesita ser fortalecido para encarar las reformas) sino la política (que siempre es voluble y podría dificultar la implementación de políticas). Así, como apuntó Oscar Oszlak, durante los 90 el Estado argentino estuvo lejos de retirarse; de hecho, en más de un sentido, creció: aumentó el gasto público, concentró facultades en el Poder Ejecutivo y actuó con discrecionalidad para dar y quitar excepciones a la desregulación (como el caso del sector automotriz, que fue durante años protegido mediante normativas oficiales). Por supuesto, este “crecimiento apolítico” no dotó al aparato estatal ni de recursos ni de herramientas para planear alternativas ni para intentar recorrer caminos que pudieran desviarse del “consenso”. Así, las crisis, de origen interno o externo, lo encontraron imposibilitado de realizar cualquier rectificación.

La ética reemplaza la política

Aunque buena parte de la sociedad permaneció fiel a la idea de “mantener el modelo”, los cada vez más numerosos sectores perjudicados trataron de hacerse oír mediante medidas de fuerza que en muchos casos adquirieron formas novedosas y que hacían epicentro no en el Poder Ejecutivo, donde las reformas eran impulsadas e implementadas, sino en el Congreso y en los Tribunales, donde las medidas eran aceptadas. Jubilados, maestros, trabajadores y desocupados, pero también productores del campo y pequeños empresarios levantaron carpas, ayunaron, se instalaron en plazas, cortaron rutas, hicieron “camionetazos” y “bocinazos” y marcharon en defensa de “sus derechos”, pero poco o nada lograron. Y es que, más allá de la acción de algunas organizaciones puntuales, el acuerdo con el modelo parecía monolítico.

Una buena muestra de la solidez de la hegemonía neoliberal puede verse en los ejes de campaña elegidos por los principales partidos de la oposición (la UCR y el Frente por un País Solidario, FREPASO) en las elecciones de 1995. A pesar de que los efectos de la devaluación mexicana (el llamado “efecto tequila”) se habían hecho sentir en todo el país y de que voceros del gobierno habían admitido abiertamente que la elección del modelo implicaba estar a merced de esos *shocks* al menos durante varios años, la oposición eligió centrar su discurso en los aspectos éticos. Así, el elenco gubernamental fue acusado de actos de corrupción, amiguismo y clientelismo, pero la continuidad del modelo no fue puesta en duda por prácticamente ningún dirigente político (hubo excepciones, es claro, como los sectores de izquierda dentro y fuera del FREPASO y Terragno en la UCR).

Incluso cuando el público o los periodistas instaban a los candidatos como Carlos *Chacho* Álvarez a discutir la pertinencia de continuar o no en la senda abierta por Menem, la oposición se limitaba a repetir una distinción que había sido acuñada por Jorge Blanco Villegas, presidente de la UIA, entre la política “abierta” o “amistosa” con el mercado (que, dicho sea de paso, era la expresión utilizada por el Banco Mundial para referirse a las reformas

neoliberales) y los “fundamentalistas del mercado” como “la gente de FIEL y del CEMA”. Esta diferenciación (en la que un hombre como Cavallo podía estar tanto en un lugar como en el otro) fue claramente aprovechada por Menem, quien, con toda razón, se propuso a sí mismo como el garante de la continuidad del modelo frente a un grupo que ofrecía como “alternativa” (no garantizada) ser más prolijo en la implementación del neoliberalismo y la convertibilidad.

Pese a que Menem ganó las elecciones de 1995 con más votos que los que había obtenido en 1989, el intento de la oposición de reemplazar la ausencia de una discusión política por un debate ético mostraría sus réditos en los años siguientes. Pero, por supuesto, eso no implicó cambios en “el modelo”. Esos cambios llegarían más tarde, en medio de una crisis social de profundísimas dimensiones que obligó al regreso, siquiera parcial, de la política.

Final del juego

Aunque la investigación en la que se basa este trabajo llega sólo hasta el año 1995, no quisiéramos cerrar este capítulo sin aludir, de forma brevísima, al gobierno de la Alianza y el final de la convertibilidad (que no equivale al fin de la nueva derecha argentina).

Por disidencias personales, pero sobre todo por la ambición política de Cavallo, Menem rompió con su ministro poco después de su reelección. El reemplazante fue Roque Fernández, economista del CEMA. Durante su gestión, Fernández profundizó las medidas neoliberales y sostuvo la convertibilidad contra viento y marea, aunque para ello tuvo que elevar el endeudamiento a niveles cada vez mayores. En 1997, el triunfo electoral de la coalición entre la UCR y el FREPASO (Alianza) abrió el tiempo de descuento para Menem. La crisis asiática de ese año permitió que se volviera a discutir (muy levemente) la conveniencia de seguir o no con la convertibilidad, pero en ningún momento se cuestionaron las reformas estructurales; por el contrario, se habló de darles solidez mediante la siempre demorada “segunda ola de reformas”. En todo caso, se decidió seguir adelante con la paridad del uno a uno.

A comienzos de 1999 parecía evidente para muchos que la convertibilidad tenía sus días contados. Las quejas contra el atraso cambiario venían de todos los sectores productivos. Sin embargo, Fernández, más por convicción que por cálculo político, decidió mantener el esquema. Como reacción, el candidato oficialista, Eduardo Duhalde, se pronunció tempranamente en contra de la continuidad de la convertibilidad, lo que provocó que los sectores que más tenían que perder con la caída del modelo (los mercados financieros, las empresas transnacionales, los concesionarios de servicios públicos privatizados) comenzaran a presionar al opositor De la Rúa para que asegurase la permanencia de la paridad y del esquema institucional en el que se sustentaba (lo que implicaba mantener en sus puestos a las autoridades del Banco Central y a la muy objetada Corte Suprema de Justicia).

Por razones de campaña o porque realmente creía que se podía mantener el modelo (o cambiarlo más adelante), De la Rúa acabó afirmando públicamente que en su gobierno un peso seguiría valiendo un dólar. Su primer Ministro de Economía, José Luis Machinea, un hombre de la UIA, hizo “todo lo posible” para mantener la paridad cambiaria. Eso implicó, básicamente, firmar acuerdos con los organismos de crédito para obtener dinero con el que financiar al gobierno. A cambio de (las promesas de) ese dinero, Argentina aceptó hacer ajustes cada vez más duros en la economía (reduciendo gastos incluso de forma ilegal, mediante la quita de un porcentaje a los salarios de los empleados públicos) y profundizar aun más las transformaciones institucionales (haciendo realidad la eterna exigencia neoliberal de una profunda reforma laboral). Como era de esperarse, los sucesivos ajustes provocaron una contracción económica mayor, lo que a su vez repercutía sobre la recaudación tributaria y ensanchaba el déficit. Se repetía así, una vez más, el ciclo crisis/más neoliberalismo/crisis mayor/aun más neoliberalismo.

En septiembre de 2000 se desató un escándalo al hacerse público que la reforma laboral se había obtenido por medio del pago de sobornos a senadores de la Nación. El caso culminó a comienzos de octubre con la renuncia del vicepresidente Álvarez y un

Poder Ejecutivo que, aparentemente, se enorgullecía del aislamiento conseguido. En noviembre, se produjo un nuevo compromiso con el FMI, el “Blindaje”, un intercambio de dinero “fresco” a cambio de que De la Rúa consiguiese firmar un acuerdo fiscal con todas las provincias y reformara el sistema previsional subiendo la edad jubilatoria y anulando la jubilación mínima garantizada por el Estado. Una muestra más del ciclo crisis/auge del neoliberalismo y de la incapacidad de los cuadros económicos y políticos para emprender o siquiera imaginar salidas alternativas.

En el verano 2000/2001 la recaudación empeoró y se hizo claro que el gobierno no cumpliría con las metas que le había impuesto el FMI. Los días de Machinea acababan, pero el neoliberalismo era inamovible; lo que se discutía es si el reemplazante vendría de la FM-IERAL (Cavallo) o de la FIEL (López Murphy). Finalmente el elegido fue –contra las intenciones de De la Rúa y de Álvarez– López Murphy.

Antes de presentar sus propuestas en público, el equipo de FIEL que acompañaba al flamante ministro alertó sobre un *default* inminente en caso de que no se aceptaran sus medidas. Y aunque el nuevo plan de ajuste tuvo sus defensores (por ejemplo, el diario *La Nación*), el rechazo social y político fue claro y contundente y López Murphy se vio obligado a renunciar a los pocos días. Lo sucedió quien desde hacía tiempo estaba en los planes del Presidente (y era anhelado por buena parte de la población): Domingo Cavallo.

A pesar de sus sucesivas iniciativas para tratar de llevar “calma a los mercados”, de los “superpoderes” que había pedido (aprobados por la UCR, el FREPASO y el menemismo), del apoyo de quienes no eran afines al gobierno y del megacanje de deuda (que, se suponía, daría algo de aire en el corto plazo), Cavallo se mostró incapaz de ejecutar (siquiera parcialmente, mediante su idea de una canasta de monedas) una salida ordenada de la convertibilidad. La retención compulsiva de depósitos (el “corralito” y el “corralón”) sellaron su suerte y definieron el final caótico del gobierno de De la Rúa y de la convertibilidad. Pero, como lo demostrarían los años posteriores, una cosa es “salir de la convertibilidad” y otra muy distinta abandonar el modelo neoliberal.

Coda

A lo largo de los capítulos anteriores hemos tratado de mostrar que algunas de las visiones comúnmente aceptadas sobre la derecha neoliberal no son del todo ciertas. Vimos, por ejemplo, que el neoliberalismo no es igual al liberalismo clásico; que no conforma un pensamiento único sino una multiplicidad de ideas; que no sólo fue impuesto desde afuera sino que también recibió importantes impulsos desde adentro del país; que su hegemonía alcanzó tal fuerza que sólo una crisis de una profundidad sin precedentes pudo ponerla en tela de juicio. Por cuestiones de espacio, dejamos sin tratamiento varios temas que, sin embargo, tienen una importancia crucial, como, por poner apenas un caso, el papel jugado por los funcionarios de los organismos multilaterales de crédito y los operadores financieros en la implantación del neoliberalismo. Pese a todo, creemos que pudimos presentar una idea que nos parece fundamental para entender el neoliberalismo en general y el neoliberalismo argentino en particular: su vocación por suspender o incluso anular la política, entendida como disputa, como debate entre ideas y modelos alternativos.

En efecto, durante los últimos treinta años, en Argentina se produjo una reorientación de la economía cuyo rasgo más importante fue su autonomización con respecto a la política. Eso, en un país que ha recuperado sus instituciones democráticas, equivale a decir que la economía se independizó de las demandas (mediadas por representantes) del *demos*. Pero debe quedar claro que la independencia de la esfera económica no es una cuestión abstracta; se trata de la expresión material del poder de los actores más concentrados de la economía y de su modelo de acumulación por expropiación (al que, siguiendo a David Harvey, podemos caracterizar brevemente como una acumulación originaria permanente).

La terrible crisis de 2001 abrió la posibilidad de un regreso de la política. En realidad, habría que decir que *exigió* ese regreso para intentar resolver los múltiples dilemas a los que la economía

autonomizada de la sociedad no podía ofrecer respuestas. Es por eso que en este último período se han comenzado a generar discursos que se proponen como alternativas al neoliberalismo. Que alguno de ellos logre enfrentar con éxito la hegemonía neoliberal resquebrajada no depende sólo de la capacidad técnica de los equipos que los formulan ni de la voluntad política de los gobernantes para llevarlos adelante (elementos que, a no dudarlo, serán necesarios). Depende, ante todo, de la firmeza con que los distintos sectores sociales decidan que vale la pena seguir actuando políticamente; es decir, de su convicción para perseverar en el debate democrático.

Parafraseando la idea de Stuart Mill que sirve como epígrafe de esta obra, sólo con la acción política será posible que, las visiones opuestas al neoliberalismo superen las etapas de ridículo (que sufrieron en los 90) y controversia (que atraviesan en la actualidad) y se conviertan en concepciones aceptadas.

En este sentido son preocupantes las formas que adquieren ciertas discusiones que cierran (en lugar de abrir) los espacios de debate. Un buen ejemplo de ello fue la controversia en torno al republicanismo que se inició al poco tiempo de comenzada la gestión de Néstor Kirchner. A partir de 2004 una parte de la nueva derecha (que antes había apoyado la concentración de poderes en manos del Ejecutivo como medio para impulsar las reformas neoliberales) empezó a criticar al gobierno de Kirchner acusándolo de hegemónico y antirepublicano. Paralelamente, ciertos sectores que se habían mostrado críticos de esa actitud durante los 90 se alinearon en la defensa de un hiperpresidencialismo que ahora veía más proclive a apoyar sus propuestas. De este modo, lo que debería ser una confrontación entre proyectos de país se transformó en una disputa sobre las instituciones y la probidad de los hombres que las ocupaban. Así, los ámbitos de debate democrático y la política misma, lejos de verse robustecidos, se debilitaron.

Los gobiernos de comienzos del siglo XXI tienen tareas ineludibles por delante: deben recomponer las instituciones no sólo para devolver al Estado su capacidad de acción, sino también para comenzar a forjar sólidos canales que reaseguren que las distintas

demandas populares sean tenidas en cuenta. Sólo así los caminos alternativos al orden neoliberal permanecerán abiertos a pesar de los triunfos circunstanciales de la nueva derecha. Sólo así la reaparición de la política dejará de ser un epifenómeno para ser en la práctica lo que siempre fue en la teoría: la base de la democracia.

Bibliografía

- Acuña, Carlos (1994) “Politics and Economics in the Argentina of the Nineties (Or, Why the Future No Longer is What it Used to Be)”, en Acuña, Carlos, Gamarra, Eduardo y Smith, William (orgs.), *Democracy, Markets, and Structural Reform in Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile and Mexico*, New Brunswick, Transaction Publishers.
- Alsogaray, Álvaro (1968) *Bases para la acción política futura*, Buenos Aires, Atlántida.
- (1993) *Experiencias de cincuenta años de política y economía argentina*, Buenos Aires, Planeta.
- Álvarez, Emiliano (2007) “Los intelectuales del ‘Proceso’. Una aproximación a la trama intelectual de la última dictadura militar”, *Políticas de la Memoria* N° 6-7.
- Álvarez-Uría, Fernando (1998) *Neoliberalismo versus democracia*, Madrid, La Piqueta.
- Artana, Daniel (1997) “Los desafíos económicos de la Argentina para el año 2000”, *Revista del Instituto de Capacitación y Formación de Dirigentes Políticos* N° 1.
- Artana, Daniel *et al.* (1999) “Las transformaciones en el Estado en el período 1999-2003”, *Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental* N° 14.
- Azpiazu, Daniel (1998) “La élite empresaria y el ciclo económico. Centralización del capital, inserción estructural y beneficios extraordinarios”, en Notcheff, Hugo (org.), *La economía argentina a fin de siglo. Fragmentación presente y desarrollo ausente*, Buenos Aires, FLACSO-Eudeba.
- Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo y Nochtteff, Hugo (1998) “Menem’s great swindle: convertibility, inequality and the neoliberal shock”, *NACLA Report on the Americas*, N° 6.
- Banco Mundial (1991) *Informe sobre el desarrollo mundial 1991: La tarea acuciante del desarrollo*, Washington DC.
- (1997) *The State in a changing World*, Washington, DC, OUP.

- Basualdo, Eduardo (2006) *Estudios de historia económica argentina desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Buenos Aires, Siglo XXI-FLACSO.
- Becker, Gary Stanley (1976) *The economic approach to human behavior*, Chicago, University of Chicago Press.
- Beltrán, Gastón J. (2005) *Los intelectuales liberales: poder tradicional y poder pragmático en la Argentina reciente*, Buenos Aires, Eudeba.
- (2006) “Acción empresaria e ideología”, en Pucciarelli, Alfredo (org.) *Los años de Alfonsín*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Benegas Lynch, Alberto (h) (2004) *Cavilaciones de un liberal*, Buenos Aires, Lumiere.
- Benegas Lynch, Alberto (1961) *Destino de la libertad*, Buenos Aires, Centro de Estudios sobre la Libertad.
- (1989) *Por una Argentina mejor*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Bobbio, Norberto (1995) *Liberalismo y democracia*, Buenos Aires, FCE.
- Böhm-Bawerk, Eugen von y Joseph Alois Schumpeter (1999) *Ensayos de teoría económica*, Madrid, Unión Editorial.
- Bonvecchi, Alejandro (2002) “Estrategia de supervivencia y tácticas de disuasión. Los procesos políticos de la política económica después de las reformas estructurales”, en Novaro, Marcos (org.) *El derrumbe político: en el ocaso de la convertibilidad*, Buenos Aires, Norma.
- Borón, Atilio Alberto (2000) *El Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo*, Buenos Aires, FCE.
- Botana, Natalio R. (2006) *Poder y hegemonía: el régimen político después de la crisis*, Buenos Aires, Emecé.
- Buchanan, James (1975) *The limits of liberty: between anarchy and Leviathan*, Chicago, University of Chicago Press.
- y Tullock, Gordon (1993) *El cálculo del consenso*, Madrid, Planeta.
- Camou, Antonio (1998) “Saber técnico y política en los orígenes del menemismo”, *Perfiles Latinoamericanos* N° 12.
- Campbell, John L. (2001) “Institutional Analysis and the Role of Ideas in Political Economy”, en Campbell, John L. y Pedersen, Ove Kaj (orgs.) *The rise of neoliberalism and institutional analysis*, Princeton, Princeton University Press.

- Canelo, Paula (2004) “La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el PRN (1976-1981)”, en Pucciarelli, Alfredo (org.) *Empresarios, tecnócratas y militares*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Canitrot, Adolfo (1980) “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976”, *Desarrollo Económico* N° 76.
- Castellani, Ana Gabriela (2006) “Los ganadores de la ‘década perdida’. La consolidación de las grandes empresas privilegiadas por el accionar estatal. Argentina 1984-1988”, en Pucciarelli, Alfredo (org.) *Los años de Alfonsín*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Cavallo, Domingo (1996) *El sustento técnico del régimen de convertibilidad*, Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias Económicas.
- Terragno, Rodolfo H. (1999) *Debate Cavallo/Terragno*, Bernal, UNQ.
- y de Pablo, Juan Carlos (2001) *Pasión por crear: en diálogo con Juan Carlos De Pablo*, Buenos Aires, Planeta.
- de Pablo, Juan Carlos (1977) *Los economistas y la economía argentina*, Buenos Aires, Macchi.
- (1994) *Quién hubiera dicho: la transformación que lideraron Menem y Cavallo*, Buenos Aires, Planeta.
- (1995) *Apuntes a mitad de camino: economía sin corbata*, Buenos Aires, Macchi.
- Dornbusch, Rudgier y Edwards, Samuel (1990) “The macroeconomics of populism”, *Journal of Development Economics* N° 32.
- Evans, Peter (1999) “El Estado como problema y como solución”, *Desarrollo Económico* N° 140.
- Fernández, Roque B. (1983) “La crisis financiera argentina: 1980-1982”, *Desarrollo Económico* N° 89.
- Freeden, Michael (1996) *Ideologies and Political Theory*, Oxford, OUP.
- Friedman, Milton (1999) *La economía monetarista*, Barcelona, Altaya.
- y Rose D. Friedman (1980) *Capitalismo y Libertad*, Barcelona, Grijalbo.

- Fundación de Investigaciones Económicas Latinamericanas (1996) *La Administración Pública Nacional: Propuestas para su reestructuración*, Buenos Aires.
- y Consejo Empresario Argentino (1992) *Hacia una economía de Mercado*, 2a. edición ampliada, Buenos Aires.
- García Belsunce, Horacio A. (1982) *Política y economía en años críticos*, Buenos Aires, Troquel.
- Geddes, Barbara (1997) “Las políticas de liberalización económica”, *Agora* N° 5.
- Gerchunoff, P. y Torre, Juan Carlos (1996) “La política de liberalización económica de la administración Menem”, *Desarrollo Económico* N° 143.
- Gloria-Palermo, Sandye (1999) *The evolution of Austrian economics: from Menger to Lachmann*, Londres y Nueva York, Routledge.
- Gray, John N. (1994) *Liberalismo*, Madrid, Alianza.
- Heredia, Mariana (2002) “Política y liberalismo conservador a través de las editoriales de la prensa tradicional en los años 70 y 90”, en Levy, Bettina (org.) *Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: lecturas políticas*, Buenos Aires, CLACSO.
- (2004) “El proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM y CEMA”, en Pucciarelli, Alfredo (org.) *Empresarios, tecnócratas y militares*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- (2006) “La demarcación de la frontera entre economía y política en democracia. Actores y controversias en torno de las políticas de Alfonsín”, en Pucciarelli, Alfredo (org.), *Los años de Alfonsín*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- IERAL (1999) “Las regulaciones en la Argentina. Transformar el Estado y potenciar los mercados de la sociedad”, *Jornadas de la Asociación de Bancos de Argentina*, Buenos Aires.
- Konrad Adenauer-Stiftung (1980) *Economía social de mercado*, Lima.
- Krueger, Anne O. (1974) “The Political Economy of the Rent-Seeking Society”, *American Economic Review* N° 64.
- (2000) *Economic policy reform: the second stage*, Chicago, University of Chicago Press.

- Krugman, Paul (1994) *Peddling Prosperity. Economic Sense and No Sense in the Age of Diminished Expectations*, Nueva York y Londres, Norton.
- Lepage, Henri (1982) *Mañana el liberalismo*, Madrid, Espasa-Calpe.
- López Murphy, Ricardo y Salvadores, Oscar F. (2002) *López Murphy: Razón o demagogia*, Buenos Aires, Planeta.
- Mansilla, César L. (1983) *Las fuerzas de centro*, Buenos Aires, CEAL.
- Martínez de Hoz, José Alfredo (1991) *Quince años después*, Buenos Aires, Emecé.
- Moraes, Reginaldo C. (2002) “Reformas neoliberais e Políticas Públicas: Hegemonia Ideológica e Redefinição das relações estado-sociedade”, *Educação & Sociedade* N° 80.
- Morresi, Sergio Daniel (2006) *O liberalismo desenquadrado. Uma crítica às leituras neoliberais do liberalismo clássico*, Tesis de Doctorado, USP, San Pablo.
- (2007) “La democracia de los muertos. Algunos apuntes sobre el liberalismo-conservador, el neoliberalismo y la ideología del Proceso de Reorganización Nacional”, *XI Jornadas Interescuelas de Historia*, Tucumán.
- (2008) “Neoliberales antes del neoliberalismo”, en Soprano, Germán y Frederic, Sabina (orgs.) *Construcción de escalas en el estudio de la política*, Buenos Aires, UNGS-Prometeo (en prensa).
- Mouffe, Chantal (2007) *En torno a lo político*, Buenos Aires, FCE.
- Muraca, Matías (2007) “Hegemonía y discurso político en Argentina (1976-1985)”, en Rinesi, Eduardo, Nardacchione, Gabriel y Vommaro, Gabriel (orgs.) *Las lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*, Buenos Aires, UNGS-Prometeo.
- N’Haux, Enrique M. (1993) *Menem-Cavallo: el poder mediterráneo*, Buenos Aires, Corregidor.
- Nash, George H. (1987) *La rebelión conservadora en los Estados Unidos*, Buenos Aires, GEL.
- Novaro, Marcos (2006) *Historia de la Argentina contemporánea: de Perón a Kirchner*, Buenos Aires, Edhasa.

- Nozick, Robert (1981) *Philosophical explanations*, Cambridge, Harvard University Press.
- (1991) *Anarquía, Estado y Utopía*, México, FCE.
- O'Donnell, Guillermo A. (1997) *¿Democracias Delegativas?*, Buenos Aires, Paidós.
- O'Neil Trowbridge, Shannon (2001) “The Role of Ideas in Neoliberal Economic Reform: The case of Argentina”, Washington, LASA.
- Oszlak, Oscar (2003) “El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina”, *Desarrollo Económico* N° 168.
- Palacio Deheza, Carlos (1981) *El Plan Martínez de Hoz y la economía argentina*, Buenos Aires, Corregidor.
- Palermo, Vicente y Novaro, Marcos (1996) *Política y poder en el gobierno de Menem*, Buenos Aires, Norma.
- (2003) *La dictadura militar, 1976-1983: del golpe de Estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós.
- Palomino, Mirta L. de (1988) *Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina, 1955-1983*, Buenos Aires, CISEA-GEL.
- Perriaux, Jaime (1970) *Las generaciones argentinas*, Buenos Aires, Eudeba.
- Pocock, J. G. A. (1972) “Languages and their implications: The Transformation of the Study of Political Thought”, *Politics, Language and Time*, Londres, Methuen.
- Quiroga, Hugo (2004) *El tiempo del Proceso. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*, 2ª ed., Rosario, Homo Sapiens-Ross.
- (2005) *La Argentina en emergencia permanente*, Buenos Aires, Edhasa.
- Ramírez, Hernán (2007) *Corporaciones en el poder. Institutos económicos y acción política en Brasil y Argentina. IPÊS, FIEL y Fundación Mediterránea*, Buenos Aires, Lenguaje Claro.
- Rand, Ayn (2000) *The Virtue of Selfishness*, Nueva York, Penguin.
- Riker, William H. (1982) *Liberalism against populism*, San Francisco, Freeman.
- Rofman, Alejandro (s/f) “¿Reforma o un nuevo rol para el Estado?”, *Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental* N° 11.
- Rothbard, Murray Newton (1978) *For a new liberty: the libertarian manifesto*, Nueva York, Collier.

- Samuels, Warren J. (1993) *The Chicago school of political economy*, New Brunswick, Transaction Publishers.
- Schvarzer, Jorge (1983) *Martínez de Hoz: la lógica política de la política económica*, Buenos Aires, CISEA.
- (2000) *Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1976-2000*, Buenos Aires, A-Z.
- Sidicaro, Ricardo (1996) “El régimen autoritario de 1976: refundación frustrada y contrarrevolución exitosa”, en Quiroga, Hugo y Tcach, César (orgs.) *A veinte años del golpe. Con memoria democrática*, Rosario, Homo Sapiens.
- (2001) *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*, Buenos Aires, Eudeba.
- (2002) *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Smith, W. C. (1991) “State, Market and Neoliberalism in Post-Transition Argentina: The Menem Experiment”, *Journal of Inter-American Studies and World Affairs* N° 45.
- Stigler, George Joseph (1975) *The citizen and the State: essays on regulation*, Chicago, University of Chicago Press.
- Tenembaum, Ernesto (2004) *Enemigos. Argentina y el FMI: la apasionante discusión entre un periodista y uno de los hombres clave del Fondo en los noventa*, Buenos Aires, Norma.
- Thompson, Andrés (2004) *Think tanks en la Argentina. Conocimiento, instituciones y política*, <<http://168.96.200.17/ar/libros/argentina/cedes/thom1.rtf>>, octubre 2004.
- Torre, Juan Carlos (1998) *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*, Buenos Aires, Paidós.
- Tullock, Gordon (1988) *Rent seeking*, Hampshire, Edward Elgar Publishing.
- van Overtveldt, Johan (2006) *The Chicago School: how the University of Chicago assembled the thinkers who revolutionized economics*, Chicago, Agate.
- Vellinga, Menno (1997) *El cambio del papel del Estado en América Latina*, México, Siglo XXI.

- Vilas, Carlos M. y otros (2005) *Estado y política en la Argentina actual*, Buenos Aires, UNGS-Prometeo.
- von Hayek, Friedrich August (1973-1979) *Law, legislation and liberty*, Londres, Routledge.
- (2005) *Camino de servidumbre*, Madrid, Alianza.
- von Mises, Ludwig (1990) *Liberalismo*, San Pablo, Instituto Liberal.
- (1998) *Human Action: A Treatise on Economics*, Auburn, The Ludwig von Mises Institute.
- Weyland, Kurt (1999) “Neoliberal Populism in Latin America and Eastern Europe”, *Comparative Politics* N° 4.
- Williamson, John (1990) *Latin American adjustment: how much has happened?*, Washington, DC, Institute for International Economics.
- (1993) “Democracy and the Washington Consensus”, *World Development* N° 8.
- Zeppernick, Ralf (1991) *El papel del Estado en la economía social de mercado*, Guatemala, Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
- Zinn, Ricardo (1976) *La segunda fundación de la República*, Buenos Aires, Pleamar.
- (1980) *4 años después en la segunda fundación de la República*, Buenos Aires, Pleamar.

Índice

Introducción y reconocimientos	9
La teoría neoliberal	13
El neoliberalismo en Argentina	41
Auge y crisis del neoliberalismo argentino	79
Coda	97
Bibliografía	101

A un cuarto de siglo del inicio del período histórico abierto en 1983, esta colección se propone examinar los cambios producidos desde entonces en la sociedad argentina.

Corriente heterogénea y decisiva en la historia de las ideas políticas y económicas contemporáneas, el neoliberalismo ha estado muy presente en los grandes debates argentinos desde mediados de los años 50. A través de fundaciones, lobbies y “tanques de ideas” ha incidido sistemáticamente en las políticas públicas del país, a cuyos sucesivos gobiernos proveyó de numerosos cuadros técnicos e intelectuales. Este libro examina esa fuerte influencia de las ideas y políticas neoliberales en la Argentina de las últimas décadas, destaca como uno de sus efectos principales la autonomización de la economía frente a la política y establece el desafío fundamental, para los días que corren, de una democratización del Estado.

Sergio Morresi es doctor en ciencia política e investigador-docente del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde coordina la Licenciatura en Estudios Políticos.



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

